

3

Un caso de anticooperación
española

EL “COMPLEJO DEL RÍO MADERA”



Edició: Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
Coordinació: Mónica Vargas Collazos (ODG)

Autores/as:

- Víctor Maeso i Aztarain
SETEM - Catalunya
www.setem.cat
- Pablo Rejero Aubareda
Veterinaris Sense Fronteres - Bolívia
www.veterinariossinfronteras.org
- Mónica Vargas Collazos
Observatori del Deute en la Globalització
www.odg.cat



Revisió: David Llistar (ODG)
Diseño: Cristina Pagador

Fecha de elaboración: Junio de 2010
Fecha de publicación: Septiembre de 2010

Informe disponible en www.odg.cat
Contacto: publicacions@odg.cat



Esta obra está bajo una licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/> o envíe una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

**Un caso de anticooperación
española**

EL “COMPLEJO DEL RÍO MADERA”

**Mónica Vargas Collazos (Coord.)
Víctor Maeso i Aztarain
Pablo Reyero Aubareda**

ÍNDICE DE MAPAS

Página

Mapa 1. IIRSA. Ejes de Integración y Desarrollo	11
Mapa 2. Área de impacto del Eje Perú-Bolivia-Brasil	13
Mapa 3. Localización de las represas hidroeléctricas del Complejo Río Madera en Brasil y Bolivia	14
Mapa 4. Megaproyectos y transporte de la soja brasileña hacia los mercados asiáticos y europeos	17
Mapa 5. Comunidades indígenas y campesinas del Municipio de Guayaramerín (Bolivia) potencialmente afectadas por el Complejo del Río Madera	23

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Participación en el Consorcio Madeira Energia S.A. hasta enero de 2010 (Represa de Santo Antônio)	27
---	----

ÍNDICE DE ACRÓNIMOS

BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BNDES: Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
CAF: Corporación Andina de Fomento
FONPLATA: Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
IBAMA: Instituto Brasileiro de Meio Ambiente y Recursos Naturales
IIRSA: Iniciativa de Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas
MAB: Movimento dos Atingidos por Barragens
PAC: Programa de Aceleración del Crecimiento
SIN: Sistema Interconectado Nacional
TCO: Tierra Comunitaria de Origen

1

Pàg. 6

PRESENTACIÓN

2

Pàg. 8

INTRODUCCIÓN

3

Pàg. 10

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES SUDAMERICANAS (IIRSA): REORDENANDO TERRITORIOS PARA LOS CONSUMIDORES DEL NORTE

4

Pàg. 13

EL “COMPLEJO DEL RÍO MADERA”

- 4.1 Relación con IIRSA y construcción de las represas
 - 4.1.1. Relación con la producción de agrocombustibles
- 4.2 ¿Beneficios para las poblaciones locales?
 - 4.2.1 Impactos en el régimen hidráulico
 - 4.2.2 Pérdida de fauna acuática y contaminación del agua
 - 4.2.3 Impactos económicos y sociales
- 4.3. ¿Cómo se financia el “Complejo del Río Madera”?
 - 4.3.1 Un Estado que asume riesgos por la iniciativa privada
 - 4.3.2 Participación del Banco Santander
 - 4.3.3 Impactos económicos y sociales
- 4.4 La respuesta de la sociedad civil
 - 4.4.1 Movilizaciones en Brasil y Bolivia
 - 4.4.2 La Campaña en el Estado español

5

Pàg. 31

BRASIL Y BOLIVIA: DOS MODELOS ENERGÉTICOS DISTINTOS

- 5.1. Tensiones respecto al “Complejo del Río Madera”
- 5.2. La Amazonia requiere energía... ¿cuánta y para qué?

6

Pàg. 35

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Pàg. 40

BIBLIOGRAFÍA

Pàg. 43

ANEXOS

PRESENTACIÓN

Desde hace cerca de 10 años, el principal trabajo del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), en el seno de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha consistido en la investigación activista sobre las relaciones de desigualdad Norte-Sur, así como sobre la generación de deudas contraídas durante el actual proceso de globalización. Por ello, nos hemos concentrado en el análisis de los mecanismos asociados a la deuda financiera (deuda externa) de los países más pobres de la Periferia del sistema económico con los países del Centro, y, en particular, con el Estado español y la Unión Europea. Al mismo tiempo se consideran las otras “deudas externas” contraídas por los países del Centro hacia los países de la Periferia, como son: la deuda ecológica, la deuda histórica y la deuda social. En 2008, se amplió la actividad hacia otras esferas, de lo que se ha denominado “la **Anticooperación**” (Llistar 2008 y 2009).

La perspectiva de la anticooperación nos permite explicar la responsabilidad que un gran número de grupos de interés del Centro tiene en el empobrecimiento de las sociedades periféricas. Este paradigma se sustenta en tres hipótesis centrales: los contextos en los que vienen los habitantes de la Periferia dependen en gran medida y de manera creciente, de decisiones y actitudes de habitantes de Centro; la cooperación al desarrollo constituye una contribución cuyo grado es muy inferior frente a las interferencias negativas generadas en la Periferia por los países del Centro; la mayoría de estas consecuencias negativas son producidas a partir de la lógica de empresas y Estados que aspiran a crecer y asegurarse recursos y mercados. Las esferas en las cuales se ejerce la anticooperación son las siguientes: tecno-productiva, financiera, comercial, militar, diplomática, migratoria, ambiental, simbólica o ideológica y “solidaria”.

Este informe, fruto del trabajo realizado conjuntamente con Veterinarius Sense Fronteres (VSF) y SETEM, apunta el caso del “Complejo del Río Madera”, uno de los conflictos sociales, económicos y ambientales implicados

por el pujante desarrollo e integración de las mega-infraestructuras en América del Sur, en el marco de la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas (IIRSA). Nace de la preocupación generada por los impactos que puede tener la construcción de megarepresas en la Amazonía brasileña y boliviana, con la participación del principal banco español: el Banco Santander. Hemos juzgado importante la realización del trabajo con VSF y SETEM, en razón de las labores que ya implementan ambas organizaciones en torno al “Complejo del Río Madera”. En efecto, VSF apoya los procesos de construcción de la soberanía alimentaria en la Amazonía boliviana mediante el proyecto “Promoción y defensa de un modelo de desarrollo sostenible y propio de las comunidades campesinas e indígenas del Norte Amazónico de Bolivia”, precisamente en la zona de afectación del Complejo. Concretamente, VSF acompaña la defensa de la gestión territorial desde una perspectiva local, la cual contrasta con el modelo de desarrollo vinculado a las megarepresas. A su vez, SETEM, desde la Campaña “Finanzas éticas”, hace un seguimiento intensivo a las prácticas del Banco Santander, habiendo presentado, en dos ocasiones, conjuntamente con organizaciones brasileñas y bolivianas, denuncias contra el Santander ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (2008 y 2010).

En los momentos en que redactamos este Informe, más de 700 mujeres, hombres y niños, integrantes de los Pueblos Indígenas de la Amazonía boliviana y de las Tierras Bajas realizan una marcha de 1.450 kilómetros entre las ciudades de Trinidad y La Paz, reivindicando su derecho a la Autonomía Indígena, a la Tierra y al Territorio. Entre sus principales demandas, se ubica el derecho a que el Gobierno les consulte sobre cuál modelo de desarrollo desean implementar en su territorio, incluyendo el derecho de consulta sobre los proyectos de infraestructuras que pueden afectarles, como carreteras, hidroeléctricas, exploración y explotación de recursos naturales. No es la primera vez que los Pueblos originarios de las Tierras Bajas en Bolivia marchan hacia el centro del poder político. En 1990,

lograron el reconocimiento de los primeros territorios indígenas, tras la movilización de 1996 se promulgó la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria y se inició el proceso de titulación de las Tierras Comunitarias de Origen. En 2002, reclamaron la instalación de una Asamblea Constituyente, hito sin el cual, muy probablemente, el actual Estado Plurinacional de Bolivia no habría sido instaurado. Dedicamos este Informe a esos pies morenos, al paso de los cuales se forja la Historia de los Pueblos.

Además, queremos expresar nuestro más profundo y particular agradecimiento a Narda Vaquero, Luis Gómez y Luis Novoa, incansables luchadores sociales

en defensa de la Amazonía, sin cuyo paciente y cariñoso acompañamiento no habríamos podido realizar este informe. Destacamos asimismo el apoyo brindado por Juan Carlos Canamari y el personal de COSUDE y de CIPCA en Riberalta, las trabajadoras quebradoras de castaña en Riberalta, los integrantes de la Central Única de Trabajadores y Campesinos de Guayaramerín y de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Vaca-Diez, así como por las y los pescadores, comuneros y comuneras de Villa Bella, Cachuela Esperanza, Peña Amarilla y Exaltación, Patricia Molina y Lucy Chacolla del FOBOMADE, y las y los compañero/as del *Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)*.

INTRODUCCIÓN

América del Sur constituye una región cuya relevancia en términos geoeconómicos y geopolíticos es cada vez más reconocida. Prueba de ello, las intensas negociaciones en torno a Tratados de Libre Comercio que se apresuran en intentar cerrar con los países sudamericanos, tanto la Unión Europea, como Estados Unidos y varios países asiáticos. América del Sur es valorada, desde el capital, por la posibilidad de apertura de nuevos mercados, la explotación de un número considerable de recursos naturales estratégicos, y su posición geográfica particular, con acceso al Océano Pacífico y al Atlántico. Sin embargo, vastas áreas del subcontinente aún no han sido integradas del punto de vista físico con los mercados mundiales. Para lograr esa integración, se requieren infraestructuras que a la manera de “venas” permitan canalizar las mercancías y recursos que son objetos de comercio. Precisamente, con el objetivo de realizar ésta integración económica, se plantean hoy en día proyectos de megainfraestructuras que se han plasmado en la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas (IIRSA), un plan que comprende centenares proyectos de infraestructuras (transporte, energía y telecomunicaciones).

De acuerdo con Barreda (2005a), del punto de vista físico y material, en el actual proceso de globalización, los territorios son organizados de manera creciente en **corredores productivos** que vinculan entre sí a diferentes regiones, países y ciudades. Al interior de éstos corredores, se ubican redes de infraestructuras económicas (carreteras, oleoductos, acueductos, tendidos de redes eléctricas o de fibra óptica, etc.). Estas infraestructuras son articuladas en *un sistema intermodal de comunicación* (que permite interconectar distintos modos de comunicación tales como el transporte ferroviario, marítimo, por carretera, aéreo, etc.) por medio del cual se producen y distribuyen todos los días millones de toneladas de mercancías a nivel global, y se realiza la extracción de recursos naturales. Este sistema intermodal de comunicación puede ser excluyente. Así, en un gran número de casos, no integra a todas las poblaciones y regiones en las cuales

se instaura por igual, sino que privilegia la producción de riqueza respondiendo a intereses específicos. Un ejemplo de ello: la gran mayoría de las regiones donde se produce y desde donde se transporta el petróleo, el gas o la electricidad en los países más empobrecidos, no tienen acceso a éstos recursos. En cambio, las redes de infraestructuras transitan por sus territorios implicando daños socioambientales, y llevando éstos recursos a centros de consumo que pueden encontrarse muy alejados.

Ahora bien, la construcción de carreteras, ductos, represas hidroeléctricas, no es una novedad en sí. Donde sí se ubican particularidades que caracterizan actualmente a la globalización es en cuatro elementos esenciales:

- Los grandes proyectos de infraestructuras o megainfraestructuras se inscriben en planes que siguen una lógica de integración territorial transnacional.
- Se ubican principalmente en los países situados en la Periferia del sistema económico capitalista (léase, América Latina, África, Asia y los países de Europa del Este).
- Estos planes de integración de las infraestructuras reciben el apoyo económico y político de los países del Centro (sea directamente, sea vía las Instituciones Financieras Internacionales), y últimamente, de los países de la Periferia económicamente emergentes o BRICs (Brasil, Rusia, India y China).
- Estos proyectos se caracterizan por ser presentados desde una óptica de desarrollo económico asociado *necesariamente* a una mayor integración de los países de la Periferia al proceso de globalización.

Todo proyecto de infraestructura implica una transformación del espacio en el cual se desarrolla, interviniendo en términos sociales, económicos y ecológicos. Por ello, requiere de una serie de estudios previos (usualmente denominados Estudios de Evaluación de

Impacto Ambiental) que son determinados de acuerdo con las legislaciones nacionales y cuyo nivel de exigencia depende, en principio, de la fragilidad sociocultural y ecológica. Por tanto, las megainfraestructuras *interfieren* tanto en el medio ambiente como en la vida de las poblaciones. **La pregunta es si ésta interferencia es de carácter positivo o negativo para ellas.**

Dentro del conglomerado de megainfraestructuras proyectadas por IIRSA, hemos escogido el “Complejo del Río Madera”, que constituirá, si se implementa, el proyecto hidroenergético más importante de la Amazonía. Consiste en la construcción de un complejo hidroeléctrico que permita además la navegabilidad y el transporte de mercancías mediante hidrovías en la zona fronteriza entre la Amazonía brasileña y boliviana. Del punto de vista financiero, ha contado, hasta enero de 2010, con la participación directa de una institución bancaria española: el Banco Santander Central Hispano. Hoy, el papel de Santander se ubica en ser

el “Banco-Agente” que lidera aún a las entidades bancarias que financian una de las represas.

Este informe tiene por tanto el objetivo de evaluar cómo y qué medida éste proyecto de infraestructuras interfiere en las regiones donde se implementa, y puede constituir un ejemplo de **anticooperación**, definida en tanto que el *conjunto de procesos y mecanismos transnacionales generados por los países económicamente más poderosos, que, en el marco de las relaciones internacionales, interfieren negativamente en los países más empobrecidos*. Esperamos que sea una contribución a los esfuerzos desplegados desde hace años por la sociedad civil movilizadora, en aras de que las autoridades y empresas españolas asuman la responsabilidad exterior que tienen sus actividades (en este caso, mediante un agente privado, el Banco Santander), sobre todo cuando tienen el riesgo de incidir negativamente en las poblaciones más empobrecidas y en los ecosistemas más vulnerables.

INICIATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES SUDAMERICANAS (IIRSA): REORDENANDO TERRITORIOS PARA LOS CONSUMIDORES DEL NORTE

La Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas (IIRSA) surge de una propuesta común del **Banco Interamericano de Desarrollo** (BID) y de la **Corporación Andina de Fomento** (CAF) y fue presentada en el año 2000 durante la Reunión de Presidentes de América del Sur, en la ciudad de Brasilia. Se presenta como una iniciativa multinacional, multisectorial y multidisciplinaria que contempla mecanismos de coordinación entre los gobiernos, las instituciones financieras multilaterales y el sector privado.

El principal objetivo enunciado radica en la integración física de los países de Sudamérica, considerando su importancia en términos de competitividad y sostenibilidad. Se asume que las interconexiones físicas y energéticas son un medio para una integración esencialmente económica y comercial, con un claro protagonismo del empresariado (Gudynas y Buonomo 2007, 105). No solo se trata de considerar la infraestructura en sí (vial, portuaria, aeroportuaria, fluvial, etc.), sino de concebir un proceso logístico integral que incluya la ruptura de las barreras aduaneras, las telecomunicaciones, los mercados de servicios de logística (fletes, seguros, almacenamiento y procesamiento de permisos) y el desarrollo local¹. De forma tal, que IIRSA se enmarca en la “era del nuevo regionalismo”, óptica desarrollada y promovida por el BID (2000) sustentándose en las siguientes características: a) apertura a los mercados mundiales; b) promoción de la iniciativa privada; c) repliegue del Estado de la actividad económica directa.

Para entender la lógica desde la cual se plantea la gestión de esta integración por las infraestructuras, cabe señalar asimismo, que para la CAF, una industria se encuentra en etapa “embrionaria” cuando requiere de la participación del Estado como inversionista y regulador, mientras que una industria “madura” es aquella donde se han levantado las barreras y donde interviene de manera fundamental la iniciativa privada (2000). El hecho de que esta lógica contraste con las últimas intervenciones estatales a nivel global ante la actual crisis financiera o con las propias políticas del Estado brasileño, el cual, desde entidades públicas fomenta y financia activamente IIRSA, no parece provocar variación alguna en el avance de los megaproyectos. En lo que atañe a la estructura que rige IIRSA, en ésta figuran:

- El Comité de Dirección Ejecutiva: integrado por representantes de los gobiernos
- El Comité de Coordinación Técnica: integrado por BID, CAF y FONPLATA²
- Grupos Técnicos Ejecutivos (GTEs): integrados por expertos y por un gerente designado por las tres instituciones bancarias.

IIRSA ha identificado **10 Ejes o Corredores de Desarrollo** en Sudamérica (véase el Mapa 1), en los cuales se sitúan los principales megaproyectos, y que han sido definidos oficialmente a partir de una “visión de negocios”.

¹ “Plan de Acción para el IIRSA” (www.iirsa.org)

² Fondo financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata

Mapa 1

IIRSA. “Ejes de Integración y desarrollo”



Elaboració ODG a partir de: www.iirsa.org

Los criterios de selección de los ejes son, de acuerdo con sus impulsores, los siguientes:

- Cobertura geográfica de países y regiones
- Flujos comerciales existentes
- Flujos comerciales potenciales
- Volumen de inversiones recientes, en ejecución, y proyectadas en el corto plazo en las áreas de influencia de los Ejes
- Interés y grado de participación del sector privado
- Grado de sustentabilidad ambiental y social de los proyectos

La dimensión material del proceso de globalización capitalista pasa por una valorización diferencial de los territorios, que se articula con su posicionamiento geográfico para el transporte de mercancías y con la presencia de recursos naturales estratégicos. En ese sentido, del punto de vista de la integración física de los territorios desde la óptica del capital, la naturaleza es vista sea como un *recurso* por explotar, sea como una barrera por dismantelar. Así, espacios como la Cordillera de los Andes o la Amazonía son considerados como obstáculos que se debe vencer para permitir una

circulación fluida de las mercancías desde los centros de producción hasta los mercados más oportunos. De forma tal, que se visualiza a Sudamérica como cinco “islas” que deben ser interconectadas: “la plataforma del Caribe, la cornisa andina, la plataforma atlántica, el enclave amazónico central y el enclave amazónico sur” (Zibechi 2006, 20-22; Barreda 2005b). Aplicando esta lectura a los Ejes de IIRSA, constatamos en primer lugar, que éstos dibujan de manera idónea las rutas más adecuadas para el transporte de mercancías, particularmente entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. En ese sentido, Barreda (2005a) nos recuerda que hoy en día, el grueso de los intercambios comerciales del mundo se encuentra entre los Estados Unidos y los países asiáticos (Japón, China, India, etc.). En el Pacífico habita la mitad de la población del planeta, lo cual representa mercados que prometen constituir ingresos económicos importantes para economías del Centro como la estadounidense, y para economías emergentes en la Periferia como la brasileña y argentina. Por ello, **la construcción y el control de corredores o ejes para el transporte hacia el Pacífico cobran una importancia estratégica**. Así, Olivo García (2008) subraya el valor que cobran puertos

En IIRSA se destacan dos tipos de proyectos: aquellos que se refieren a la ampliación de una red de interconexión ya existente y aquellos destinados a la creación de interconexiones inexistentes o débiles. Este último es el caso de las regiones andinas y tropicales centrales de América del Sur, tocando a regiones de aún difícil acceso y el avance de la frontera agrícola, petrolera, ganadera o minera. Se aspira a conectar estas áreas con centros urbanos y puertos de exportación (CLAES 2009, 1-2).

como Paita, El Callao, Ilo, Manta, Tumaco, Arica, Iquique, entre otros, los cuales representan la posibilidad para los países de convertirse en el nodo de enlace entre Sudamérica y la cuenca del Pacífico. Ecuador, Chile y Perú compiten por ser el lugar de paso de la producción brasileña y asiática.

Los Ejes coinciden con las áreas más importantes en términos de recursos no renovables (minerales, gas, petróleo), agua y de biodiversidad (plantas, animales, microorganismos y los conocimientos tradicionales asociados). Por estas razones, podemos afirmar que los Ejes o Corredores de “Desarrollo” de IIRSA parten de una consideración pragmática de Sudamérica, en tanto que un conglomerado de regiones de tránsito de mercancías y de extracción de recursos, que resultan estratégicos en el actual proceso de globalización. De acuerdo con Zibechi, el objetivo que IIRSA persigue no es la integración continental, sino más bien su vinculación con los mercados globales, representando una “integración exógena” en lugar de propiciar una integración “hacia adentro” (2006, 22).

Un aspecto central y relativamente silenciado en IIRSA se ubica en la voluntad de “armonizar políticas, planes y cuadros normativos e institucionales de los Estados”, objetivo que también se ubicaba en la derrotada propuesta del Área de Libre Comercio de la Américas (Tautz 2009). De hecho, en la Iniciativa se distinguen además de los Ejes o Corredores de Desarrollo, una serie de “**procesos sectoriales de integración**”. Además, grupos de trabajo regionales desarrollan estudios de diagnóstico³ sobre:

- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Sistemas Operativos de Transporte Aéreo
- Facilitación de Pasos de Frontera

- Sistemas Operativos de Transporte Marítimo
- Integración Energética
- Sistemas Operativos de Transporte Multimodal
- Instrumentos de Financiamiento

Ahora bien, tal como lo veremos más en detalle en el caso del “Complejo del Madera”, las megainfraestructuras representan costos que se cifran en miles de millones de Euros y que son solventados en la mayoría de los casos por los países donde se construyen. En el marco de IIRSA, han sido determinados 514 proyectos de infraestructura de transporte, energía y comunicaciones, que se encuentran agrupados en 47 grupos y que representaban una inversión estimada de 49.428 millones de Euros. Entre dichos proyectos, fueron priorizados 31 (denominados “proyectos-ancla”) en el seno de la Agenda de Implementación Consensuada 2005 -2010, con una inversión estimada de 7.298 millones de Euros. En diciembre de 2008, se preveía que la inversión movilizaba cubría 68% de la cartera de proyectos, y que 10% de la totalidad de los proyectos había sido concluido, con un costo de 5.376 millones de Euros⁴. Uno de los roles asumidos por los promotores de la iniciativa, CAF, BID y Fonplata, se ubica precisamente en facilitar créditos comerciales a los países sudamericanos, para que puedan implementar los proyectos. Por tanto, *IIRSA representa también un incremento de la deuda externa en América del Sur*. De acuerdo con IIRSA, a diciembre de 2008, 247 de los 514 proyectos habían sido concluidos o estaban en fase de ejecución con una inversión de 27.323 millones de Euros. 190 son financiados por el Tesoro Público (**implicando 46% de la inversión total**), 29 cuentan con financiamiento público-privado y 28 disponen de financiamiento únicamente privado.

Cabe destacar el papel creciente del **Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social** (BNDES) en IIRSA, el cual se perfila como una de las principales instituciones financieras de la integración sudamericana, una real “agencia de política externa” brasileña (Tautz 2009, 5). El Banco está enteramente controlado por el gobierno brasileño y funciona también como una agencia de seguros de crédito a la exportación. En IIRSA concretamente, los objetivos de BNDES se ubican en el apoyo a exportaciones de bienes y servicios brasileños en la región y a inversiones directas del capital brasileño en el exterior. De momento, su participación en el financiamiento de los proyectos suma 3.680 millones de Euros (BNDES 2007)⁵.

³ Dichos estudios tienen por propósito la “convergencia de las regulaciones y normatividad relevantes, la competitividad en la prestación de servicios y la promoción de la inversión privada en la infraestructura” (www.iirsa.org).

⁴ Cerca de 60% de la inversión estimada en IIRSA se destina a proyectos del área de transporte, y cerca de 40% al área de energía (www.iirsa.org).

⁵ Un seguimiento exhaustivo de los conflictos sociales y ambientales de los megaproyectos de IIRSA puede ser consultado en los siguientes enlaces: <http://www.bicusa.org>; <http://www.biceca.org>

EL “COMPLEJO DEL RÍO MADERA

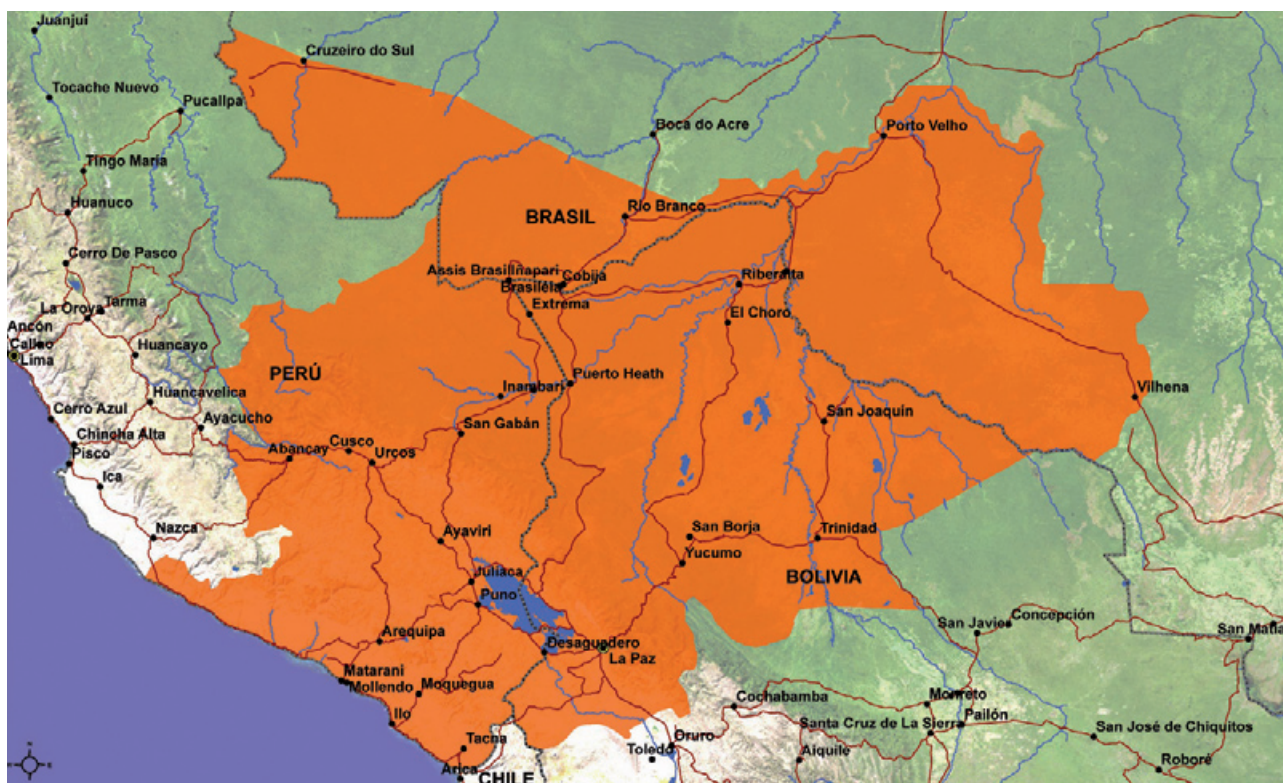
4.1. Relación con IIRSA y construcción de las represas

El **Eje Perú-Brasil-Bolivia** (*Mapa 2*) es uno de los corredores transversales de IIRSA. Abarca la región sur

del Perú, la región amazónica de Bolivia y los espacios del noroeste de Brasil. Tiene por objetivo la integración física de esta región con los puertos del Pacífico y con los grandes centros de consumo de los tres países. Este Eje contempla tres Grupos de proyectos, uno de los cuales es el “Corredor Fluvial Madera-Madre de Dios-Beni”.

Mapa 2

Área de impacto del Eje Perú-Bolivia-Brasil



Fuente: www.iirsa.org

El Grupo comprende:

- **El Complejo Hidroeléctrico del Río Madera:** incluyendo las represas de Santo Antônio y de Jirau, así como una línea de transmisión entre las dos represas y la navegabilidad entre las ciudades de Porto Velho (Brasil), Guajará-Mirim (Brasil) y Guayaramerín (Bolivia)⁶.
- Líneas de Transmisión entre las represas y los polos industriales del oriente brasileño
- Una represa binacional sobre el Río Madera (Brasil-Bolivia) (actualmente descartada)
- Una represa en la localidad de Cachuela Esperanza (Bolivia)
- La navegabilidad del Río Beni (Bolivia)
- La hidro vía Ichilo-Mamoré (Bolivia)
- Una hidro vía sobre el Río Madre de Dios y un puerto fluvial (Perú)

La identificación del Río Madera como una posible fuente de generación de energía hidroeléctrica se realizó en 1971, desde el Ministerio brasileño de

Minas y Energía. Asimismo, en 1985, la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia realizó un estudio de diseño para la construcción de una central hidroeléctrica en Cachuela Esperanza, sobre el Río Beni, con un potencial de 35 Megavatios (MW), y destinada al abastecimiento de las localidades bolivianas de Riberalta y Guayaramerín. Con el objetivo de responder a la creciente demanda energética de Brasil (estimada a 124.000 MW para 2012), en 2001 y 2002 fueron realizados Estudios de Inventario Hidroeléctrico a cargo de las empresas Furnas Centrais Elétricas SA y CNO-Constructora Norberto Odebrecht SA. Los estudios evaluaron la construcción de las represas de Jirau y Santo Antônio, sobre el tramo del río situado entre las localidades de Abuná y Porto Velho. Asimismo, se propuso una tercera hidroeléctrica (Ribeirão) aprovechando un desnivel de 20 metros en el tramo binacional entre Abuná y Guayaramerín, y se contempló una cuarta represa en la localidad boliviana de Cachuela Esperanza, sobre el Río Beni (Molina, Ledezma y Vauchel 2009, 98).

Mapa 3

Localización de las represas hidroeléctricas del “Complejo Río Madera” en Brasil y Bolivia



Elaboración propia a partir de: Molina, Ledezma y Vauchel (2009, 98)

⁶ La navegabilidad y consecuente establecimiento de una hidro vía se vincula en este caso con las represas hidroeléctricas al ser previsto un sistema de esclusas para la navegación (BIC 2009).

Tanto las hidroeléctricas de Santo Antônio como de Jirau forman parte desde 2007 de un gran número de megainfraestructuras contempladas en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Brasil. En diciembre de ese año, el proyecto de **Santo Antônio** fue adjudicado al Consorcio MESA - Madeira Energia S.A. (conocido también por el nombre de su subsidiaria SAESA - Santo Antônio Energia S.A.). Las empresas constructoras y suministradoras de maquinaria que intervienen de momento en Santo Antônio son: Odebrecht, Andrade Gutierrez, Alstom Hydro Energia Brasil, Bardella S.A. Indústrias Mecânicas, Areva Transmissão e Distribuição de Energia, Siemens Ltda, Va Tech Hydro Brasil Ltda., y Voith Siemens Hydro Power Generation Ltda⁷. El Séptimo Informe 2009 (enero-abril) del PAC señala que Santo Antônio tiene por objetivo una generación de 3.150 MW⁸. La represa está prevista para entrar en operación en el año 2012, y alcanzaría plena capacidad en un máximo de 36 meses después de haber sido inaugurada (BIC 2010a). En el momento

de operación a plena potencia, la represa produciría más de 19,5 millones de Megavatios/hora (MW/h) por año de energía eléctrica, equivalentes a cerca de 4.3% de la producción brasileña en el año 2007.

Odebrecht y BNDES se ven envueltos actualmente en un caso de deuda ilegítima, surgido a la raíz del Informe de la Comisión Ecuatoriana de Auditoría de la Deuda en Ecuador. Entre las medidas de seguimiento de los resultados del Informe implementadas por el Presidente Correa en noviembre de 2008, figura la instrucción del inicio de un proceso arbitral contra BNDES a raíz de los créditos otorgados a Odebrecht para la construcción de una represa en Ecuador cuyo funcionamiento fue suspendido tras menos de un año de operaciones, por graves fallos estructurales (Keene 2008).



Vistas de las obras de construcción de la hidroeléctrica Santo Antônio (Fuente: BIC 2010a)

⁷ Este joint venture conformado por Voith y Siemens participa en la construcción de la represa de las Tres Gargantas en China, el proyecto hidroeléctrico más grande del planeta. Esta presa no solamente tiene el récord de desplazamientos (1,2 millones de personas), sino también de inundaciones (13 ciudades, 140 localidades y 1,350 comunidades). Existe un gran número de denuncias al respecto en términos de corrupción, problemas tecnológicos, violaciones de los Derechos Humanos y dificultades en el reasentamiento de las personas desplazadas (véase: <http://internationalrivers.org/node/356>).

⁸ BNDES-Noticias, 18 de diciembre de 2008 (http://inter.bnDES.gov.br/espanol/noticias/not232_08.asp).

En lo que refiere a **Jirau**, que tendría una **generación de 3.450 MW**, el proyecto fue adjudicado en mayo de 2008 al consorcio Energía Sustentable de Brasil (ESBR), liderado por la transnacional francesa GDF-Suez (Suez Energy South America Participações Ltda.) (50.1%), conjuntamente con Eletrosul Centrais Elétricas

S/A (20%), compañía Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf (20%), y Camargo Corrêa Investimentos em Infra-Estrutura S/A (9,9%). Está siendo construida a 130 kilómetros de la ciudad de Porto Velho, en un área de densa vegetación denominada “Isla del Padre” (BIC 2010b). Alcanzaría su capacidad máxima en 2016.



Vistas de las obras de construcción de la hidroeléctrica Jirau. Inicio del hormigonado en diciembre de 2009 (Fuente: BIC 2010b)

Cabe destacar que la **hidroeléctrica binacional (Ribeirão)** se encuentra en un estado mucho menos avanzado. En abril de 2004, Odebrecht solicitó a la Superintendencia de Electricidad de Bolivia dos licencias provisionales para realizar estudios de factibilidad para la implementación de ésta represa y de aquella de Cachuela Esperanza. La solicitud fue rechazada por la Superintendencia en base a los cuestionamientos sociales y ambientales emitidos desde diferentes instituciones bolivianas. Odebrecht interpuso entonces un recurso jerárquico que tampoco fue aceptado con lo cual ha agotado la vía administrativa y podría presentar un recurso judicial (BIC 2009)⁹.

Por su parte, en 2008, el gobierno boliviano, mediante la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), encargó en 2008 por un monto de 8.2 millones de dólares a la empresa canadiense Tecsult – Aecom, la realización de

un estudio de factibilidad y diseño final del proyecto hidroeléctrico **Cachuela Esperanza**. En noviembre de 2009, Tecsult presentó públicamente los resultados de su estudio, refiriéndose a una central hidroeléctrica de 990 MW de potencia instalada, que utilizará un caudal medio de 8.900 m³/s del Río Beni. Se estima que el proyecto requerirá una inversión de 2.000 millones de dólares, sin incluir los costos ambientales ni las líneas de transmisión, puesto que el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental aún no ha sido concluido. La demanda máxima del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es de 1.000 MW a nivel nacional, y el consumo de las tres ciudades del Norte-Amazónico (Guayaramerín, Riberalta y Cobija), no supera los 20 MW. De acuerdo con Tecsult, el proyecto sería por tanto rentable a condición de que más de 95% de la energía generada sea exportada a Brasil (J. Molina 2010).

⁹ De acuerdo con Molina, Ledezma y Vauchel (2009: 100), en realidad, la construcción de la presa binacional no es compatible con aquella de Cachuela Esperanza, al generar una inundación que sumergiría a ésta localidad.

4.1.1. Relación con la producción de agrocombustibles

Otro elemento a destacar en lo que refiere a la intención de implementar las represas del Río Madera se vincula con los **agrocombustibles**. Los considerables impactos sociales y ambientales negativos generados por la producción a gran escala de materia prima destinada al biodiesel y el bioetanol, han sido señalados y desarrollados en múltiples investigaciones y publicaciones (GRAIN 2007, Holt-Giménez 2007, Vargas 2009). No obstante, se suele obviar un hecho innegable: el biodiesel y el bioetanol no suelen teletransportarse de los campos a los tanques de gasolina. Y aquí se ubica otro aspecto muy poco “bio” en el auge de los agrocombustibles: la creciente necesidad de integración de infraestructuras que implica su transporte y exportación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que como se señaló anteriormente, se encuentra entre los diseñadores de IIRSA, promueve hoy a los agrocombustibles de distintas maneras. Importa asegurar un fluido vaciado de los *commodities* hacia los puertos, no únicamente atlánticos, sino también del Pacífico, de cara a los mercados asiáticos. Así, el BID recomienda a Brasil gastar en infraestructuras 1'000 millones de dólares por año durante 15 años. Aspira, por ello, a acelerar proyectos del IIRSA, como por ejemplo la Hidrovía Paraguay-Paraná-Plata, el proyecto de navegabilidad del Río Meta, y el propio “Complejo del Río Madera”. En efecto, tal y como se ilustra en el

siguiente mapa de las rutas de exportación de la soja brasileña hacia los mercados europeos y asiáticos, esto implica la construcción de la carretera BR 163 (*número 1 en el Mapa 4*) en áreas protegidas y territorios indígenas brasileños, y que vincula a los monocultivos en el Mato Grosso con el puerto de Santarém. Una ruta alternativa para el transporte de los granos se ubica precisamente en desarrollar la navegabilidad del Río Madera (*número 2 en el Mapa 4*), que constituye una vía alternativa hacia Santarém (Greenpeace 2006).

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, co-dirige un grupo del sector privado, la Comisión Interamericana del Etanol, conjuntamente con Jeb Bush (ex – gobernador del Estado de Florida) y el ex primer ministro japonés Junichiro Kozumi. Así, el BID apoya la expansión de cultivos de palma de Colombia y de caña de azúcar y soja en la amazonía brasileña. De hecho, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó el primer financiamiento al sector privado para un proyecto de agrocombustibles en este país por un total de 120 millones de dólares, concretamente para Usina Moema Açucar e Alcohol Ltda. (São Paulo). Esta operación forma parte de una iniciativa del banco para la promoción de la estructuración de financiamiento de deuda prioritaria para cinco proyectos de bioetanol que tendrán un costo de 997 millones de dólares (BID 2007).

Mapa 4

Megaproyectos y transporte de la soja brasileña hacia los mercados asiáticos y europeos



Elaboración propia a partir de: Greenpeace (2006).

4.2. ¿Beneficios para las poblaciones locales?

Puesto que en el seno del “Complejo del Río Madera”, las represas que están siendo implementadas en la actualidad son Santo Antônio y Jirau, consideraremos aquí los impactos que pueden tener para las poblaciones locales. Entre ellos, destacaremos esencialmente las incidencias en territorio boliviano, porque se trata de una problemática que se agrava al no ser reconocida por el Gobierno de Brasil, y que por ello, no ha sido considerada en los estudios de impacto ambiental.

Es importante subrayar en primer lugar el contexto conflictivo y las diferentes irregularidades que se han hecho patentes a la hora de implementar el Complejo del Río Madera. Así por ejemplo, P. Molina nos recuerda el carácter político y carente de todo sustento técnico que tuvo la otorgación de la licencia ambiental por parte del gobierno brasileño mediante el Instituto Brasileiro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) en lo que refiere a las represas de Jirau y Santo Antônio¹⁰. En efecto, el Estudio de Factibilidad y aquel de Impacto Ambiental encargados por Furnas y Odebrecht, así como la consultoría del Banco Mundial a cargo de Sultam Alama y estudios independientes del Ministerio Público de Rondonia, arrojaron incoherencias y contradicciones (2009a, 6). Por otra parte, la resolución previa del IBAMA, así como un informe elaborado en marzo de 2007 por especialistas del Instituto, destacaban que no se podía garantizar la viabilidad ambiental de ambos proyectos. Los especialistas recomendaban denegar la Licencia Previa y apelaban al “Principio de Precaución” (Switkes 2008, 35). Sin embargo, la presión se incrementó, particularmente desde la Presidencia y desde el Ministerio de Minas y Energía, sobre el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, teniendo por consecuencia el despido del Director de Licencias y el desmembramiento del IBAMA en dos órganos (uno dedicado a la administración de áreas protegidas y otro responsable de las licencias ambientales). Finalmente, en julio de 2007, el IBAMA

otorgó la Licencia Previa para ambas represas (García, Maeso, Reyero y Vargas 2009)¹¹.

Cabe destacar que a raíz de la amplia movilización de la sociedad civil y de organizaciones campesinas, indígenas y ambientalistas en Bolivia y Brasil, el gobierno boliviano expresó entre 2007 y 2008 su preocupación al gobierno de Brasil por los impactos sociales y ambientales potencialmente generados por las represas de Jirau y Santo Antônio, incluyendo la inundación de su territorio y consecuente desplazamiento de poblaciones locales. No obstante, Bolivia se ve sujeta a una doble tensión que dificulta la adopción de una posición más contundente de cara a detener estos megaproyectos. En primer lugar, existe un debate interno, entre una tendencia “desarrollista” para la cual el mejoramiento de las condiciones de vida de la población pasa por la construcción de infraestructuras y la toma del control y consiguiente explotación de los recursos naturales. Si bien esta tendencia puede reconocer los impactos ambientales o sobre territorios de los Pueblos Indígenas, parece considerarlos como “inevitables”. Ahí, se destaca también el interés en la construcción de la represa de Cachuela Esperanza, que permitiría generar recursos mediante la venta de electricidad al país vecino. Existe otra tendencia, que aspira a preservar el medio ambiente y los recursos naturales buscando un modelo de desarrollo local y de integración territorial alternos. La segunda tensión se ubica en la complejidad de las relaciones asimétricas entre la potencia brasileña y Bolivia. En esta complejidad se incluye la voluntad del país andino de preservar una “buena” relación que es considerada, desde ciertos sectores del gobierno, como necesaria, con Brasil, del punto de vista económico y político. Este aspecto será desarrollado en la tercera parte del informe. A continuación, basándonos en investigaciones llevadas a cabo tanto desde Bolivia como desde Brasil, detallamos hasta qué punto estos megaproyectos interfieren negativamente en la vida de los pobladores locales y representan un serio peligro para el medio ambiente en la zona considerada (García, Maeso, Reyero y Vargas 2009).

¹⁰ Al atravesar el Río Madera varias entidades federativas brasileñas, y debido a los importantes impactos potenciales que comprende todo megaproyecto hidroeléctrico, corresponde al IBAMA el órgano federal, la responsabilidad del permiso o licencia. El proceso comprende varias etapas. En primer lugar, se debe obtener una licencia previa (LP), que aprueba la viabilidad ambiental del proyecto y autoriza su concepción tecnológica. Luego viene la licencia de instalación (LI), que autoriza la construcción del proyecto, y después se debe obtener la licencia de operación (LO), que está condicionada a la verificación de que todos los detalles y exigencias técnicos observados en la LP y la LI sean cumplidos. Desde el inicio, hubo conflictos sobre el área que debía ser considerada en los estudios ambientales. Las empresas (Furnas y Odebrecht) pugnaban porque se consideraran únicamente las represas, mientras que el IBAMA, en un inicio, evaluaba la necesidad de incluir a la hidrografía y las propias esclusas. Curiosamente, las propias empresas defendían el interés del proyecto en términos de incrementar la navegabilidad (mediante la hidrografía) en la zona (Switkes y Bonilha 2008, 30). Las empresas no solamente lograron con la presión ejercida mediante distintos órganos del gobierno, que se considerara únicamente los impactos directos de las represas, pero además, que se realizaran por separado los estudios sobre la construcción de las represas y sobre la línea de transmisión. Switkes observa que se trata de un fallo considerable porque se trata de una línea de cuando menos 2.500 Km. de extensión (entre Rondonia y São Paulo, uno de los principales lugares de recepción de la electricidad generada) (2008, 33).

¹¹ La tensión entre la tendencia “desarrollista” y empresarial muy presente en el gobierno del Presidente Lula, por un lado, y la voluntad de preservación del medio ambiente, por el otro, condujo de hecho a la renuncia en mayo de 2008 de la Ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

4.2.1. Impactos en el régimen hidráulico

Tal y como lo señala el BIC, debido a que la topografía de la región amazónica es relativamente uniforme, las represas en el Río Madera taponarían los ríos de toda la Cuenca del Madera. Esto afectaría directamente a los ríos Abuná, Madre de Dios, Beni, Mamoré y Guaporé, convirtiendo a la región afectada en Bolivia en un extenso pantanal (2009)¹². La investigación de Molina, Ledezma y Vauchel evalúa en ese sentido que los niveles de agua del Río Madera, así como la profundidad de flujo tendrán un incremento considerable en la cercanía de Jirau y de Santo Antônio¹³. Sin considerar el efecto de remanso, el área de inundación de Santo Antônio sería de 258 km² y aquella de Jirau, de 271 km² (J. Molina 2010). En razón del efecto de remanso hidráulico provocado por Jirau, la sobre-elevación del nivel del agua en el tramo binacional será considerable y tendrá consecuencias directas sobre: **la pérdida de la energía potencial del tramo binacional**. Al respecto, los investigadores observan que la pérdida de energía potencial en el tramo binacional sería de cerca de 250 MW medios. Esta pérdida, obviamente, tiene repercusiones no sólo sobre Brasil, sino también sobre Bolivia (Molina, Ledezma y Vauchel 2009, 159-160).

Un elemento central a considerar en este aspecto se ubica también en los efectos de sedimentación y en la inundación consecuente. Tal como lo señalan Molina, Ledezma y Vauchel (2009, 97 y 159), el Río Madera

transporta 500 millones de toneladas de sedimentos por año, es decir, cerca de la mitad de los sedimentos de toda la Cuenca Amazónica. Su investigación contrasta con los estudios y evaluaciones de Furnas y Odebrecht, arrojando resultados mucho más preocupantes. Así, en el caso de Jirau, observan que la represa favorecerá un proceso de sedimentación que será relativamente lento, pero que no se detendría al cabo de 20 años, sino que continuaría más allá de 80 años. Esto tendría por consecuencia una sobre-elevación del nivel del agua, adicional a la inundación, y que sería particularmente importante en el tramo binacional (hasta 4 metros de promedio). Este elemento implicaría también que la pérdida de energía potencial en ese tramo supere los 400 MW. Además, incrementaría de manera sustancial los riesgos de inundación durante las crecidas del río (2009, 159 – 161).

En lo que atañe a la represa de **Cachuela Esperanza**, de acuerdo con el estudio de Tecsalt, tendría una caída bruta media de 10,8 m para generar 5,5 TWh de energía media anual. El proyecto no aprovecha la caída natural de la cachuela, para no afectar a la población de Cachuela Esperanza. Por ello, la caída necesaria para la represa se obtendría aprovechando la pendiente natural del Río Beni, que es muy baja. De manera que el tramo río arriba afectado por la represa así como el área de inundación serán considerables. Esta última sería de 690 km², sin considerar el efecto de remanso, es decir, **una superficie diez veces mayor por unidad de potencia** en comparación con las represas de Jirau y de Santo Antônio (J. Molina 2010).



El Río Madera, localidad de Villa Bella, Bolivia, mayo de 2008 (Foto: ODG)

¹² La Cuenca hidrográfica del Río Madera desagua el 95% de las aguas de Bolivia.

¹³ El aumento de profundidad sería particularmente importante (entre 12 y 25 metros) en el caso de Santo Antônio (Molina, Ledezma y Vauchel 2009, 159).

4.2.2. Pérdida de fauna acuática y contaminación del agua

La construcción de las represas en Jirau y Santo Antônio provocarán fuertes impactos en la ictiofauna, al impedir el tránsito y migración de los peces y afectar la propia cadena de reproducción. Villegas nos recuerda que, de acuerdo con estudios realizados por Furnas, esto podría poner en serio peligro a 70% de las especies (2007, 112). De la misma manera, Mendes dos Santos observa que el Estudio de Impacto Ambiental registra 459 especies de peces potencialmente impactadas por las represas (2008, 115). Éstas tendrán también una interferencia en la propia estabilidad del sistema, causando incluso alteraciones mediante la modificación de los niveles, temperatura y calidad del agua. Puesto que el Río Madera tiene un papel particular en la reproducción de los peces y funciona como conexión básica entre los estuarios del Río Amazonas y las faldas de los Andes, los impactos se extienden a nivel regional (García, Maeso, Reyero y Vargas 2009)¹⁴.

Resulta importante observar que ya se hacen visibles los daños sobre la ictiofauna a raíz de la primera etapa de la construcción de Santo Antônio desde septiembre de 2008. Así, toneladas de peces han ido quedando atrapadas en los diques llamados “ensecadeiras”, los cuales represas las aguas del río el trecho donde serán

instaladas las turbinas. De un total de 70 toneladas de peces atrapados en esta primera etapa, 59 toneladas fueron devueltas al Madera, 5 fueron congeladas para su uso alimentario y 6 tuvieron que considerarse pérdidas (Salomón 2008). El consorcio atribuyó la muerte de los peces a la gran cantidad de material en suspensión en el fondo del río y a una brusca variación de temperatura durante la semana precedente, clasificada como “factor no controlable”.

De acuerdo con las empresas que impulsan el proyecto, la construcción de pasos particulares para los peces dentro de las represas garantizarían su libre tránsito. Sin embargo, éste método no ha probado su eficacia en otras megarepresas, y no podría ser utilizado por la totalidad de las especies presentes en el área.

Otro elemento que resulta preocupante se ubica en la contaminación por mercurio. En efecto, tras años de minería aurífera, el lecho del río tiene depósitos de mercurio que están siendo removidos por las obras en Santo Antônio en la actualidad¹⁵. Esto abre las puertas a una contaminación que no pone únicamente en peligro a la biodiversidad pero también la salud de los habitantes del lugar.

4.2.3. Impactos económicos y sociales

La presencia de “factores no controlables” de este tipo resulta particularmente preocupante cuando se vincula con las principales fuentes de supervivencia de poblaciones empobrecidas. En efecto, la economía local se encuentra estrechamente enlazada a la pesca. De acuerdo con la investigadora Erin Barnes, los prejuicios económicos causados por Jirau y Santo Antônio en el tramo entre las urbes brasileñas de Porto Velho y de Guajará-Mirim serían diferenciados pero considerables¹⁶. Si los pescadores de ambas ciudades tienen una renta mayor y mejores condiciones para la pesca comercial, así como la venta en los mercados urbanos, el caso de las comunidades campesinas e indígenas y las pequeñas localidades ribereñas es distinto. En éstas, se pesca más bien para alimentar directamente a las familias. En todo caso, la renta anual para los primeros sería de 24 millones de Euros, y el valor actual de los

recursos pesqueros en la región se encuentra entre 614 y 940 millones de Euros. En lo que refiere a los pescadores bolivianos, serían los primeros afectados al encontrarse en el área situada antes de las represas, y perder el acceso a los peces migratorios. Al respecto, cabe destacar que entre las conclusiones del Simposio Internacional “*Evaluación de Impactos Ambientales de las grandes hidroeléctricas en regiones tropicales: El caso del Río Madera*” (La Paz, 19 y 20 de mayo de 2009), organizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD), se concluyó que las represas de Santo Antônio y Jirau afectarían a cerca de 16.000 familias bolivianas que viven de la pesca artesanal (Ribera 2010, 18). En los afluentes bolivianos del Río Madera, el valor de la pesca es aproximadamente de 89 millones de Euros. Por tanto, no sólo se trataría de una importante pérdida económica, pero además, una amenaza real para la fuente de alimentación de estas poblaciones.

¹⁴ Se daría asimismo una proliferación de especies predatoras como la piraña, la cual tiene un escaso valor para la pesca, además de representar un peligro para las poblaciones ribereñas. Un factor adicional en la extinción de los peces se ubica en la reducción de la velocidad de las aguas, que implica una falta de oxigenación y el aumento de la temperatura (BIC 2009).

¹⁵ Esta realidad está siendo reportada por la prensa brasileña. Véase por ejemplo: “Usinas do Madeira levam caos e riqueza a RO” en la Folha de São Paulo, 8 de marzo de 2009.

¹⁶ Incluyendo al tramo binacional puesto que la ciudad brasileña de Guajará-Mirim se encuentra exactamente frente a la localidad boliviana de Guayaramerín.



Inundación de comunidad cercana a Guayaramerín, provocada por el fenómeno de La Niña, Bolivia, mayo de 2008 (Foto: ODG)

La “*Solicitud urgente de medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas y campesinas ribereñas del Río Madera-Bolivia*” presentada en diciembre de 2007 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por diferentes organizaciones sociales bolivianas especifica detalladamente los impactos económicos y sociales que implica el Complejo del Río Madera (P. Molina 2009b, 32). Es importante recordar que las comunidades bolivianas ribereñas del Madera ya están siendo afectadas por el Cambio Climático, particularmente en lo que refiere a las múltiples inundaciones de sus territorios. Por ello, les inquieta el incremento de inundaciones que sufrirán sus tierras de cultivo en el caso de que el Complejo Hidroeléctrico sea implementado. Entre los meses de mayo y de noviembre, cuando el nivel del río baja, los pobladores se dedican a cultivos de supervivencia. No obstante, con la construcción de las represas, la inundación sería permanente, por lo que perderían esta posibilidad de asegurar su soberanía alimentaria. Esto afectará también a los pastizales, poniendo en riesgo tierras de pastoreo. Las tierras de pastoreo son especialmente sensibles por su poca infiltración causada por la falta de una cobertura vegetal que airee la tierra. Además

son tierras extremadamente compactadas por soportar a las cabezas de ganado. Esto hace que el agua no filtre nunca y se estanque o corra provocando fuerte erosión y pérdida de la capa fértil superficial (García, Maeso, Rejero y Vargas 2009).

Otra actividad económica que se encontrará afectada por la inundación es la producción de castaña en Bolivia, que actualmente es destinada a la exportación hacia mercados europeos y brasileños. Estos árboles necesitan condiciones específicas de humedad en la tierra¹⁷. Si bien la actividad castañera constituye una fuente de explotación laboral en todas sus fases de producción, de momento representa una fuente de trabajo real para gran parte de la población boliviana que habita en la región. La recogida y quiebre de castaña son actividades que los pobladores hacen, en el curso del año, complementarias con sus labores agrícolas. Por lo que la desaparición de los árboles es otra amenaza real para sus fuentes de abastecimiento. El aumento de la humedad de los suelos provocará la atrofia de las raíces de varias especies, entre ellas del árbol de castaña, eliminando miles de ejemplares y expulsando su frontera hacia el interior y alejándolos de las poblaciones recolectoras.

¹⁷ Bolivia es hoy el primer productor de castaña, al exportar el 70% de la producción mundial, mientras que Perú el 20% y Brasil el 10% (BIC 2009).



Trabajadoras quebradoras de castaña en Riberalta, Bolivia, mayo de 2008 (Foto: ODG)

Es importante resaltar también que la inundación tendrá lugar en selvas vírgenes de la Cuenca Amazónica, interfiriendo de manera significativa en la biodiversidad vegetal y animal que quedaría cubierta por las aguas. Así, no solamente especies vegetales de reconocido valor medicinal se extinguirán, pero además, al pudrirse bajo las aguas estancadas de las represas, constituyen una amenaza real en términos de la emisión de metano, uno de los tres mayores gases de efecto invernadero del planeta.

Entre los costos sociales, también se sitúa la propagación de enfermedades infecciosas que ya afectan a la región, tales como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, la filariasis, la esquistosomiasis, la *leishmaniasis* y otras. Estas se verían incrementadas al implicar las represas un estancamiento de aguas considerable. En la actualidad (sin represas), al ser el área amazónica una de las más marginadas de Bolivia, no se dispone de los recursos sanitarios necesarios para responder a estas enfermedades. Así, los departamentos de Pando y Beni no solamente registran los tipos de malaria más peligrosos, pero además concentran los índices más altos de afectados por esta enfermedad (Villegas 2007; Cabezas y Flores 2007). Curiosamente, el Estudio de Impacto Ambiental de Jirau y Santo Antônio identifica únicamente como área de influencia en términos sanitarios, al municipio de Porto Velho (Brasil), obviando la posibilidad de extensión de estas enfermedades hacia las partes más altas del Río Madera, en territorio boliviano. La investigación realizada recientemente al respecto por Matías concluye claramente en que las alteraciones del medio ambiente producidas por la construcción de las represas será un detonante que afectará a toda la región,

favoreciendo la dispersión de los agentes patógenos. También, resalta los recursos escasos en términos de infraestructura y el difícil acceso que caracterizan a las comunidades campesinas e indígenas afectadas. En este sentido es importante considerar que el empeoramiento de sus condiciones de vida implica un aumento de los niveles de pobreza y un mayor grado de vulnerabilidad ante las enfermedades. Matías constata también que el costo social consecuente es mucho más elevado que el beneficio económico ofrecido por la construcción de las represas (2009, 90-91).

En relación con los impactos señalados, la construcción de las represas implicará una expulsión de las poblaciones locales y la consecuente migración hacia zonas urbanas. Esta realidad ya ha comenzado a afectar a las localidades que se encuentran en el área de Jirau y de Santo Antônio, y a Porto Velho en particular, donde se comienza a hablar de una situación de posible colapso demográfico¹⁸. Este fenómeno resulta concomitante a los grandes proyectos de infraestructura, y puesto que se opera sobre poblaciones empobrecidas y marginadas, no suele ser considerado en el análisis de los costos reales de estas infraestructuras. Se dará en este caso, un vaciamiento del campo que aumentará la presencia de población vulnerable que es explotada como mano de obra no calificada en diferentes sectores. Concretamente, el área de construcción atraerá mano de obra barata, con los problemas sociales asociados a la presencia de un gran número de trabajadores en una zona aislada (incremento de la prostitución, actividades ilegales como la caza, la pesca, la extracción de minerales y de madera) (BIC 2009).

¹⁸ Véase por ejemplo: "Usinas do Madeira levam caos e riqueza a RO" en la Folha de São Paulo, 8 de marzo de 2009. Otro indicador del incremento de población considerable que se ha observado en el área de construcción de las represas se ubica en el aumento de 63% entre 2008 y 2009 del número de casos de malaria en las proximidades de Porto Velho. De acuerdo con Rute Bessa, directora del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Porto Velho, esta extensión de la enfermedad se vincula con el aumento de la población del distrito de Jaci-Paraná, donde la población se ha cuasi triplicado desde el inicio de las obras de la represa de Jirau (Craide 2009).

Mapa 5

Comunidades indígenas y campesinas del Municipio de Guayaramerín (Bolivia)
potencialmente afectadas por el “Complejo del Río Madera”



Fuente: Central Única de Trabajadores y Campesinos de Guayaramerín (Foto: ODG)

Otro elemento esencial y particularmente preocupante se ubica en la afectación a los Derechos de los Pueblos Indígenas. El propio Estudio de Impacto Ambiental de Furnas y Odebrecht confirma que 1.089 personas indígenas pertenecientes a 7 Pueblos se verán afectadas por la parte brasilera (MAB 2008b). El Relator Nacional de Derechos Humanos sobre Medioambiente de la Plataforma Brasileña por los Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales recomendó incluso al gobierno que revocase la licencia de construcción inicial, ya que el análisis se centró únicamente en el aspecto de la tierra pero no investigó más impactos a dicho nivel. En Bolivia, la población del norte amazónico cuyos territorios serán afectados

por las represas es indígena y campesina. Allí habitan integrantes de los Pueblos Tacana, Araona, Toromona, Esse Ejja, Cavineño, Machineri y Yaminahua. Basan su subsistencia en la agricultura, la pesca y la recolección, y sus territorios han sido formalmente reconocidos como Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Además, cabe señalar la presencia del **Pueblo no contactado** Pacahuara, en la fronteras del departamento de Pando con Brasil. Se trata, evidentemente, de una población particularmente vulnerable y su zona de ocupación se ubica entre el Río Negro y el Abuná, los cuales serán afectados por las variaciones del nivel del agua y las inundaciones causadas por las represas (García, Maeso, Reyero y Vargas 2009)¹⁹.

¹⁹ Este Pueblo se verá empujado de manera permanente a buscar alimento y espacio en otros lugares, tales como los asentamientos de colonos o los territorios de otros Pueblos Indígenas, con los consecuentes conflictos y enfrentamientos previsibles, que podrían causar el exterminio de los Pacahuaras (P. Molina 2009, 40).

La población amazónica, diversa y plural, conserva aspectos comunes como el del acceso a la alimentación de una manera agro-extractivista y sostenible. La combinación entre una agricultura de subsistencia y un manejo del medio para el aporte nutricional restante (recolección, pesca y caza) es esencial para la existencia de estos Pueblos y constituye también un elemento clave en la propia conservación de la Amazonía. En la región norte-amazónica de Bolivia, las comunidades se organizan alrededor de la producción agroecológi-

ca y la recolección de diversos productos locales. Se activan organizaciones que tienen planes elaborados de comercialización local que les están permitiendo proyectar mayores ingresos económicos y pensar en proyectos territoriales comunes que excluyan una explotación irracional e insostenible de la Amazonía. Esta situación está a punto de cambiar, puesto que ni el agua, ni la tierra o las poblaciones podrán complementarse en el momento que se pongan en marcha las turbinas de este gran complejo hidroeléctrico.



Integrantes del Pueblo Indígena Esse Eja, Riberalta, Bolivia, mayo de 2008 (Foto: ODG)

4.3. ¿Cómo se financia el “Complejo del Río Madera”?

4.3.1. Un Estado que asume riesgos por la iniciativa privada

El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), en coherencia con su papel creciente dentro de IIRSA, es el principal organismo financiador del Complejo Madera, con una contribución del 65% del coste total de la represa de Santo Antônio, y de un 68,5% de la de Jirau, además de haber prometido financiar una parte de la inversión necesaria para construir la futura línea de transmisión entre los 2.450 Km. que separan las ciudades de Porto Velho (Rondonia) y Araraquara (São Paulo) (Banktrack 2009).

En el caso de **Santo Antônio**, aproximadamente la mitad del financiamiento proviene de fondos propios de BNDES y la otra mitad está co-financiada por el siguiente grupo de bancos: *Bradesco, Unibanco, BES Investimento do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste y Banco da Amazônia*. Tal y como lo veremos más adelante, hasta enero de 2010, el Banco Santander participaba directamente en el consorcio. En el caso de la represa de **Jirau**, aproximadamente un tercio proviene de co-financiación con otro grupo de bancos: *Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco BBI, Unibanco y Banco do Nordeste do Brasil*.

A pesar de hasta ahora no existe un compromiso de financiamiento por parte del Banco Mundial (BM), éste asumió los costos de contratación de los consultores por parte del Ministerio de Minas y Energía (MME). De acuerdo con Furtado (2008, 27), el pago del estudio hecho por Sultan Alam para analizar los impactos de sedimentación de Santo Antônio constituye un polémico ejemplo de intervención del Banco Mundial. Este estudio llegó a ser citado por la Ministra Dilma Rousseff, en tanto que definitivo para solucionar el problema relativo a los sedimentos. Desde el inicio de todo el proceso, tanto el MME como el BM negaron el acceso a la información a la sociedad civil.

Esta presencia del sector privado en las operaciones del BNDES relacionadas con megaproyectos no es de extrañar. En 2008 el banco creó la Empresa Brasileña de Proyectos (EBP), un ente público-privado formado por distintas entidades bancarias (entre ellas, el Banco Santander) y sectores financieros de grupos empresariales. EBP tiene como función contratar y coordinar específicamente proyectos de infraestructuras para las modalidades de concesiones públicas y Asociaciones Público-Privadas en Brasil y América del Sur (Verdum 2008), contribuyendo a la función no declarada por parte de BNDES de servir de trampolín para los monopolios privados (Novoa 2009).

BNDES, no obstante, no es el único banco público de desarrollo nacional, que apoya el proyecto. En efecto, también se encuentran los bancos brasileños: Banco da Amazonia (siendo muy controvertida una parte de su apoyo, ya que lo obtiene del FNO –Fundo Constitucional do Norte–, que teóricamente sólo puede financiar Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) y el Banco do Nordeste. Ambos financian préstamos a Santo Antônio y Jirau respectivamente. Por otro lado, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)²⁰ también han intervenido, aunque de forma indirecta, en el proyecto (Wiziak y Brito 2008). Posteriormente, apareció un nuevo actor en la financiación de Santo Antônio, un fondo de inversión llamado FI-FGTS²¹ que, como veremos más adelante, compró las cuotas de banco Santander.

Los costes totales del proyecto (incluyendo las represas y las esclusas de navegación) se han venido incrementando vertiginosamente desde las estimaciones iniciales durante su presentación en 2003 (BIC 2009). En efecto, en los primeros estudios oficiales hubo un incremento de casi el 100% con respecto a dichas estimaciones (a pesar de que se disminuía la capacidad de las represas) y en 2007, con la aprobación de los estudios de viabilidad, la revisión de los costes los hizo aumentar un 129%. En lo que atañe a las líneas de transmisión, los incrementos durante este proceso fueron aún más destacables. Las últimas noticias, referentes específicamente a la represa de Jirau, indican que los costes van a ser un 60% mayores que los estimados inicialmente, a causa del cambio del emplazamiento original de la represa y del retraso en la concesión de la licencia ambiental (Goulart 2009).

²⁰ Véase: BNDES-Noticias, 18 de febrero de 2009 (http://inter.bndes.gov.br/espanol/noticias/not022_09.asp). De acuerdo con Bank Information Center, el BID también admitió su interés de financiar el Complejo del Río Madera. Asimismo, tanto este banco de desarrollo regional como BNDES firmaron un convenio en 2006, mediante el cual se creó una línea de crédito adicional para los sectores de infraestructura e insumos básicos con el objetivo de viabilizar inversiones de gran tamaño, realizadas principalmente por la iniciativa privada (BIC 2009). De hecho, la línea de transmisión constituye uno de los proyectos que podrían ser beneficiados con esta línea.

²¹ El FI-FGTS es un fondo de inversión en infraestructuras creado con recursos del FGTS –Fundo de Garantia do Tempo de Serviço–, que es un fondo de pensiones de los funcionarios en Brasil (véase: <http://www.caixa.gov.br/fgts/index.asp>)

En paralelo, BNDES pasó de prometer la financiación de hasta el 80% de la obra (antes de haber verificado la viabilidad económica y socioambiental del proyecto), a rebajar su porcentaje hasta el aproximado 66% actual, cubriendo la diferencia principalmente mediante *la Caixa Econômica Federal y el Banco da Amazônia* (Wiziak y Brito 2008). De acuerdo con el profesor de la Universidad Federal de Rondônia, miembro de la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales, Luis Novoa, dicha decisión se

vincula con el papel protagónico de BNDES en la atenuación de la crisis financiera que afecta a Brasil. De forma tal, que, contrariamente a las apariencias, la disminución de la aportación significa que BNDES tiene que repartir sus esfuerzos en Brasil y en el continente, al seguir siendo una de las pocas fuentes seguras para soportar inversiones en megaproyectos. Dicho de otro modo: el Estado tiende a absorber todos los riesgos que la iniciativa privada no está dispuesta a asumir.

4.3.2. Participación del Banco Santander

El presidente del Santander, Emilio Botín, afirmó durante su discurso inaugural ante la Junta de Accionistas 2009 que Brasil constituye un país clave en la estrategia internacional del banco. Así, durante el primer trimestre de 2009 los beneficios en Brasil representaron 17% del conjunto de beneficios de esta entidad bancaria. Considerados en su totalidad, éstos situaron al Santander en 2008 en la tercera posición del ranking mundial de los bancos privados. Aunque el Santander ya penetró en el mercado brasileño desde 1982, la creciente importancia porcentual del país en sus resultados se debe a la compra en 2008 del Banco Real, que ha convertido al Santander en la tercera entidad bancaria del país en depósitos y la segunda en el área de créditos con 3.603 oficinas y 21,9 millones de clientes. Ante el panorama de la crisis financiera global, de acuerdo con el Informe Anual 2008 del Santander, el papel estratégico de Brasil a nivel internacional se vincula con *“la solidez institucional, socio-política y financiera del país y su potencial económico y demográfico”* (Banco Santander 2008).

Más allá de su papel como banca comercial minorista en Latinoamérica y Brasil, desde su implantación en el continente, el banco ha actuado como un agente constante de apoyo financiero a empresas y grandes proyectos en la zona, con presencia mayoritaria en el sector brasileño de los proyectos hidroeléctricos (Maeso 2008b). Esto ha tenido lugar a través de préstamos o servicios financieros a compañías, como por ejemplo el Grupo Votorantim (vinculada con las represas de Barra Grande y Campos Novos en Brasil), Tractebel (vinculada con la represa de Cana Brava y Estreito en Brasil), Vale (vinculada con la represa de Estreito en Brasil), Furnas (vinculada con las represas de Manso, Foz do Chapecó y Santo Antônio en Brasil) y CPFL Energia (relacionada con Barra Gran-

de y Campos Novos en Brasil). Debemos resaltar que todas estas empresas tienen en su haber un historial de proyectos controvertidos, que generaron o generan rechazo por su impacto ambiental y social. En estos casos, el Santander, a diferencia del otro gigante español, el BBVA, no financia directamente los proyectos según la fórmula project-finance, sino que su vínculo se manifiesta exclusivamente a través de las ayudas financieras de múltiples tipos (la más corriente, préstamos) que aporta a las empresas mencionadas. Esto implica que, del punto de vista de la denuncia, resulte complejo imputar responsabilidad directa al banco -y, por tanto, su contradicción con las normativas internacionales de carácter voluntario que ha firmado-, por los efectos que producen. No obstante, difícilmente podría el banco desconocer las actividades que realizan sus clientes con el dinero que les presta, del mismo modo que a los pequeños clientes individuales se les pide todo tipo de información antes de concederles un préstamo.

“(…) El beneficio atribuido al Grupo en 2008 alcanzó la cifra de 8.876 millones de euros. Durante el pasado ejercicio el Grupo ha avanzado decisivamente en dos áreas geográficas a las que doy gran importancia para el futuro: el Reino Unido y Brasil. (...) En Brasil, la integración de Banco Real está superando nuestras previsiones. La economía brasileña está sorteando la crisis económica mejor que otros países. En los últimos años Brasil ha sentado las bases para un crecimiento sostenido a largo plazo apoyado en su estabilidad macroeconómica, institucional y social. Todo ello confirma lo acertado de nuestra estrategia de crecimiento en dicho país”.
Discurso de Emilio Botín durante la Junta de Accionistas 2009, <http://www.santander.com>

²² Los beneficios del Santander se distribuyeron en el primer trimestre de 2009 de la siguiente manera: Europa continental 50% (40% en el Estado español), 34% en Iberoamérica (17% Brasil) y 16% en Reino Unido (Banco Santander 2009)

²³ De acuerdo con el Presidente del Santander, la región representa 85% de la base del negocio general del banco.

²⁴ Fórmula de financiación de un proyecto concreto (por ejemplo un gasoducto) donde diversos actores tales como gobiernos, empresas privadas, bancos privados y otras entidades se agrupan para dar apoyo financiero específico al mismo.

A pesar de esta constancia en evitar el *project-finance*, la relación previa de Santander con el mundo de las hidroeléctricas, y su relación específica con Furnas, la empresa energética estatal brasileña, llevaron probablemente al banco a entrar de manera directa y visible en la construcción del Complejo Río Madera, como veremos a continuación.

El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (*Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB 2008a*) fue el primero en denunciar que el Banco Santander formaba parte del consorcio ganador del concurso para construir la primera represa en el Madera, Santo Antônio. Su participación se llevaba a cabo mediante un Fondo de Inversión de Participación (FIP)²⁵ creado en 2007 conjuntamente con el banco portugués Banif, que representaba el 20% del total del consorcio. Santander y Banif se repartían equitativamente este 20%. El consorcio era un *Special Purpose Vehicle* llamado, como se señaló anteriormente MESA/SAESA, liderado por las empresas brasileñas Odebrecht (privada) y Furnas (estatal), y aportaría el 30% del coste total de construcción de la represa, mientras que el 70% restante lo suministraría el BNDES (MAB 2008a).

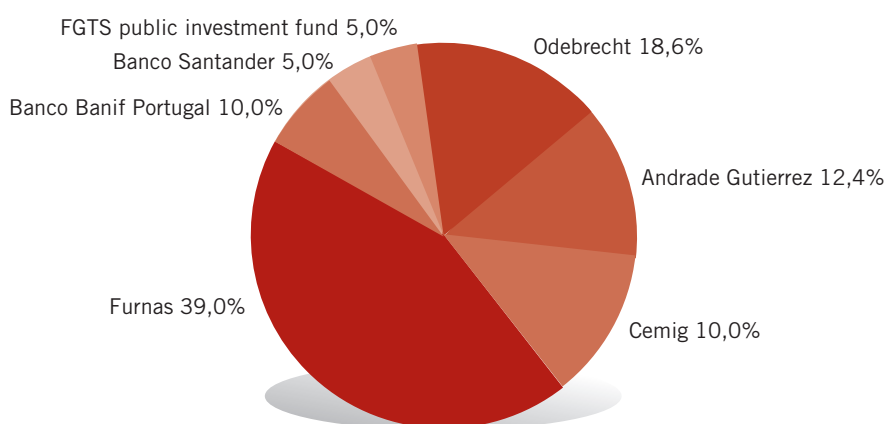
De acuerdo con Banktrack (2009), Santander no sólo era un socio más, sino que tuvo un papel destacado en el proceso de conformación del consorcio: asesoró sobre la estructura financiera y coordinó el grupo de bancos (Santander, Bradesco, Unibanco, BES Investimento do Brasil, Caixa Economica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste y Banco da Amazonia) (*Project Finance 2009*) que co-financian la represa junto con el BNDES.

Desde la creación del FIP, Santander y Banif tenían la intención de vender su 20% (valorado en cerca de 900 millones de euros), troceado en forma de cuotas de participación a otros bancos, fondos de inversión y de pensiones. Aparentemente, ese era su objetivo inicial y querían solamente prestar servicio como gestores, y no como “aportadores” de recursos, obligación de quien forma parte de MESA (Wiziak y Brito 2008). No obstante, esta intención se vio obstaculizada por el hecho de que un banco importante como el brasileño Itaú rechazó la oferta, y hasta 6 meses después del inicio de las obras no pudieron vender ni una sola de las cuotas. Es probable que la explicación se ubique en los temores que despierta entre otras entidades financieras la inversión en un proyecto tan controvertido del punto de vista socioambiental, con irregularidades en el proceso de licenciamiento. A ello puede añadirse la incertidumbre en cuanto al retorno de las inversiones (por las previsiones de caída del precio de la energía en el mercado libre).

Finalmente, en abril de 2009, Santander consiguió vender la mitad de su participación a un fondo de inversión llamado FI-FGTS, según informaba la Folha de São Paulo²⁶. Posteriormente, en enero de 2010, Santander vendió al mismo fondo de inversión el restante 5% que todavía mantenía y Banif siguió conservando su 10% inicial²⁷. Esto significa que en la actualidad el banco español ya no participa directamente aportando recursos, **pero sigue liderando el grupo de bancos que financian el proyecto, como “Banco-Agente”, por lo que mantiene responsabilidades en la construcción de Santo Antônio.** La distribución accionarial completa *antes de enero de 2010* puede ser examinada en el siguiente gráfico:

Gráfico 1

Participación en el Consorcio Madeira Energia S.A. hasta enero de 2010 (Represa de Santo Antônio)



Fuente: Banktrack. “Rio Madeira Dam Project”
(Disponibile en: http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/rio_madeira_dam_project)

²⁵ Este FIP fue registrado como Amazônia Energia ante la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM).

²⁶ Véase también: <http://www.bicusa.org/es/Article.11118.aspx>.

²⁷ Véase: <http://ef.amazonia.org.br/index.cfm?fuseaction=noticia&id=341028>

4.4. La respuesta de la sociedad civil

4.4.1. Movilizaciones en Brasil y Bolivia

Un número creciente de organizaciones de la sociedad civil (campesinas, indígenas y otras) de las poblaciones que serán o ya son afectadas por la construcción del Complejo del Río Madera han demostrado en los últimos años una clara oposición²⁸. En alianza con grupos ambientalistas de ambos lados de la frontera, movilizan hoy los recursos a su alcance para detener los proyectos. Gracias a un trabajo en red vitalizado por luchas ante diferentes tipos de agresiones territoriales, recurren a investigaciones cada vez más rigurosas, realizadas por expertos críticos e independientes, y despliegan estrategias de comunicación que poco a poco permiten apartar el velo del silencio que suele caer sobre proyectos destructivos que tocan a intereses económicos importantes. Entre estas iniciativas, cabe recordar, por ejemplo, que la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando y la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia presentaron el diciembre de 2007 una solicitud de Medidas Cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Mamani 2009).

Soberanía energética y soberanía alimentaria

“La soberanía alimentaria y energética es el derecho de los pueblos a producir y controlar los alimentos y la energía para atender sus necesidades (...). La producción de energía no puede, de ningún modo, sustituir o poner en riesgo la producción de alimentos.(...) La agroenergía sólo deberá ser producida de forma diversificada y complementaria a la producción de alimentos. Defendemos un modelo energético popular descentralizado, que exprese las necesidades sociales y las características y potencialidades locales y regionales. El papel de los campesinos y de la agricultura familiar debe ser definido por su soberanía y autonomía. (...) Defendemos políticas públicas que garanticen el crédito, asistencia técnica y condiciones para que los campesinos produzcan agroenergía en pequeñas unidades de producción”.

Primera Conferencia Nacional Popular sobre Agroenergía. Por la defensa de la soberanía alimentaria y energética (Curitiba, Paraná, Brasil. 31 de octubre de 2007)

En 2009, dirigentes de Pando de estas organizaciones fueron apresados en Porto Velho, en una protesta contra las represas (*véase Anexo I*). Su resistencia se articula con el Foro Boliviano de Medio Ambiente, el cual ha realizado investigaciones sobre los impactos, organizado encuentros locales y regionales y desempeñado una tarea de cabildeo ante el Gobierno boliviano. Estos actores implementan también actualmente proyectos de desarrollo endógeno en la región, tales como la sociedad “Nuez Amazónica”, conformada por FO-BOMADE y organizaciones de productores de castaña orgánica de Beni y Pando, que propone un modelo de extracción de castaña con formas tradicionales y respetuosas del medio ambiente y el equilibrio de la región amazónica boliviana²⁹. En Brasil, se lanzó también la Campaña “Río Madera Vivo”³⁰, y la resistencia ante el “Complejo del Río Madera” se enmarca en el movimiento nacional de lucha contra las represas (MAB). El conjunto de estos actores plantea actualmente modelos de desarrollo local sostenible e incluso de generación de energía sostenible, basándose en la defensa de la **soberanía alimentaria** y de la **soberanía energética** (ver recuadro).

Por otra parte, desde el año 2007, se conformó en Brasil la Plataforma BNDES, que articula a más de 30 organizaciones sociales brasileñas, entre las cuales se encuentra el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), y el Movimiento de los Sin Tierra (MST). La Plataforma se ha concentrado en la denuncia de los impactos de los proyectos apoyados desde BNDES, así como en la participación accionaria del Banco en el sector minero (empresa Vale do Rio Doce), en la ganadería (26,9% de Bertin y 19,4% de JBS Friboi, responsables de deforestación en la Amazonía), y en la producción de etanol (Empresa Brasileña de Energía Renovable, procesada por la explotación de trabajadores en condición de semi-esclavitud). Puesto que los fondos de BNDES provienen esencialmente del Fondo de Apoyo al Trabajador y del Tesoro Nacional, ésta Plataforma defiende la idea de un BNDES 100% estatal y público, con inversiones responsables que mejoren la calidad de vida de la población más empobrecida de Brasil, y que disponga de una política de información transparente, adoptando criterios sociales y medioambientales en la concesión de los créditos. La Plataforma organiza actualmente el Primer Encuentro Sudamericano de poblaciones afectadas por los proyectos financiados por BNDES (noviembre de 2010)³¹.

²⁸ El conjunto de acciones (legales, políticas y sociales) desarrolladas en la resistencia al “Complejo del Río Madera” puede ser consultado en: <http://www.bicusa.org/es/Project.Action.10138.aspx>

²⁹ Véase: <http://www.fobomade.org.bo/>

³⁰ Véase: <http://www.riomadeiravivo.org/> y <http://www.mabnacional.org.br/>.

³¹ Véase: <http://www.plataformabndes.org.br/>



Movilización del MAB en Brasil contra las represas del Río Madera, Porto Velho, 14 de marzo de 2008 (Foto: MAB)

4.4.2. La Campaña en el Estado español

En paralelo a la búsqueda de compradores de su participación en Santo Antônio, el Santander demostró cierto interés en participar en el concurso para la segunda represa, Jirau. No obstante, en diciembre de 2008 comunicó oficialmente su renuncia a participar en dicho concurso, por los riesgos socioambientales asociados al cambio de emplazamiento de última hora que sufrió la represa con respecto al proyecto original³². El Banco Itaú también rechazó la invitación a participar en Jirau, que finalmente no contó con ningún banco dentro del consorcio ganador (llamado CESB, Consorcio Energia Sustentavel do Brasil), liderado por Tractebel Energia, pero que sí recibió ayuda económica co-financiada entre BNDES y un grupo de bancos formados por Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco BBI, Unibanco y Banco do Nordeste do Brasil (Project Finance 2009). La decisión de Santander de frenar su profundización en el proyecto vino precedida de una campaña impulsada en el Estado español por la organización SETEM³³, que ya en 2007 invitó a unas jornadas en el Estado español a un miembro del MAB, en representación de colectivos y pueblos afectados por la grandes represas en Brasil, detrás de las cuáles se había encontrado a la gran banca española. El proceso de intentar escoger un caso paradigmático para utilizarlo como campaña contra Santander culminó en 2008 con el descubrimiento de su vínculo directo con el Madera. La recogida de firmas entre la ciudadanía, la acusación durante el Tribunal Permanente de los

Pueblos en Lima⁴³, y la intervención durante la Junta de Accionistas del banco en junio 2008, forzaron una respuesta del propio presidente, Emilio Botín, comprometiéndose a dar seguimiento al proyecto en cuestión y reportar en la junta del año siguiente³⁵.

“En la junta pasada (2008) intervinieron 3 accionistas para plantear temas del medio ambiente. Yo dije que tomábamos buena nota para reforzar nuestra posición y durante el año hemos reforzado [procesos] de admisión, de seguimiento y se está haciendo todo de acuerdo con los Principios de Ecuador. Se ha creado un comité de sostenibilidad presidido por el Consejero Delegado. Y quiero decir en la junta de accionistas que damos enorme importancia a este asunto. Ahora bien, también sabe la política del banco de no hablar de operaciones con clientes. Pero en este caso voy a hacer una excepción porque se trata de un tema que es público: es la operación de Río Madera en Brasil. Puedo decir que el plan de acción se ha desarrollado para la gestión del medio ambiente por lo que se han encargado revisiones, se ha implantado dentro del plan anual de sostenibilidad y estamos ocupándonos de este tema en concreto”.

Respuesta del presidente de Santander, Emilio Botín, a la intervención de Annie Yumi Joh de SETEM durante la Junta de Accionistas 2009.

³² Véase: <http://www.bicusa.org/es/Article.11007.aspx>

³³ Campaña finanzas Éticas de SETEM. www.finanzaseticas.org, en estrecha coordinación con la campaña www.bbvasinarmas.org

³⁴ Véase: <http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?article190>

³⁵ Véase: http://www.bbvasinarmas.org/noticias/cas08_intervencion_junta_accionistas_banco_santander.htm

En ese mismo año, como hemos mencionado anteriormente, el Santander decidía renunciar a optar a la represa de Jirau, y adoptar los Principios de Ecuador³⁶, de los que todavía no era firmante, como por el contrario sí lo era Banco Real, su adquisición en Brasil. Al mismo tiempo, decidía, junto con los bancos Bradesco y Unibanco, contratar los servicios de una consultora independiente, ERM/Bureau Veritas, para verificar si el proyecto de la represa de Santo Antônio se ajustaba a Principios de Ecuador (Wiziak y Brito 2008). Repetidamente SETEM ha solicitado al banco el informe (o borrador) de la consultoría, sin recibir respuesta. En junio de 2009, durante la Junta de Accionistas del banco, se denunció públicamente la contradicción entre la reciente firma de los Principios y las irregularidades del complejo Madera, como ya comunicaron previamente varias organizaciones brasileñas articuladas en resistencia entorno al proyecto³⁷ (véase Anexo II). La respuesta del presidente Botín, vacía de contenido, no aportó luz a la cuestión, ni mostró ningún tipo de compromiso tangible por parte del banco.

De manera paralela, las organizaciones catalanas Veterinarius Sense Fronteras, Medicus Mundi Catalunya, SETEM, Entrepobles, Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització y Enginyeria Sense Fronteras señalaron ante la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo los impactos del “Complejo del Río Madera”, por su posible afectación a proyectos financiados con el apoyo de la Agencia (véase Anexo III). Ante esta situación, el Gobierno catalán expresó su preocupación al Gobierno boliviano, sin recibir una respuesta concreta.

Finalmente, tal como se señaló, Santander vendió la totalidad de sus acciones en el consorcio que construye Santo Antônio, pero puesto que mantiene el papel de “Banco-Agente”, sigue siendo objeto de la denuncia por parte de las organizaciones del Estado español. Así, en mayo de 2010, la responsabilidad del Santander fue nuevamente denunciada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en Madrid³⁸.



Tribunal Permanente de los Pueblos, Madrid, 14-18 de mayo de 2010 (Foto: Enlazando Alternativas)

³⁶Véase: http://www.equator-principles.com/documents/Equator_Principles.pdf, y <http://ecodiario.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/1247090/05/09/Rsc-el-banco-santander-asume-los-principios-de-ecuador.html>

³⁷Véase: <http://internationalrivers.org/en/node/4319>

³⁸Véase: <http://www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique60>

BRASIL Y BOLIVIA: DOS MODELOS ENERGÉTICOS DISTINTOS

Para abordar el tema de la situación energética en la región amazónica debemos recordar que la crisis energética mundial ya es una realidad, agudizada por el próximo agotamiento de los recursos hidrocarbúricos. Esta crisis ha llegado en una situación de aumento constante del consumo, sin que se haya operado una modificación en la matriz energética, ni apostado por verdaderas energías renovables, desde su investigación a su implementación. Empresas e inversores optan actualmente por la búsqueda del control de otras fuentes de energía. Así, acaparan directa o indirectamente ríos, territorios y pueblos. La producción de biodiesel o etanol necesita cantidades considerables de tierras cultivables que antes eran sembradas de manera sostenible y que alimentaban a los pueblos que hoy son expulsados de ellas. Las tierras ya no pertenecen a esa población agricultora, pero de manera creciente, tampoco pertenecen al país que afirma una soberanía sobre ellas. Las grandes extensiones de tierra ya sólo responden a la empresa que ha invertido y a una pequeña minoría local beneficiada por la transacción. La crisis energética mundial no es sólo la entrada del sistema económico energético en la cuesta abajo de la extracción de petróleo y sin sustituto en cantidades necesarias; la verdadera crisis se evidencia en las disputas mundiales por adueñarse de las fuentes de energía potencialmente explotables.

La Amazonia no está en absoluto exenta de esta pugna. Se trata de una zona que ha pasado a ser uno de los principales objetivos de las empresas multinacionales por poseer una de las mayores cantidades de agua dulce del planeta encauzada en caudalosos ríos, grandes extensiones de tierra fértil, bosques primarios, yacimientos mineros y una incomparable riqueza biológica y de conocimientos asociados a ésta. Esto convierte a la región amazónica en foco de interés de empresas de la alimentación, mineras y energéticas, de construcción, biotecnológicas y farmacéuticas, así como en sujeto de hábiles discursos de gobiernos y organizaciones interesadas en “abrir” los

bosques tropicales al mercado global. En esta disputa por la Amazonía, el “Complejo del Río Madera”, es uno de los megaproyectos que más controversia está causando entre las organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y movimientos sociales, pero también entre dos gobiernos latinoamericanos que no comparten totalmente una misma realidad ni un mismo modelo desarrollista y que, sin duda, no tienen los mismo intereses en el proyecto.

Sin lugar a dudas, la realidad energética de Bolivia y Brasil es la más diametralmente opuesta que podamos encontrar en el sub-continente. Brasil es un país con un nivel económico, un poder político, una demografía, un nivel de industrialización, un consumo y un territorio que supera cualquier otro país de Sudamérica, mientras que Bolivia sigue siendo el país más empobrecido, menos poblado y menos poderoso económica y políticamente. A todo ello cabe añadir las diferencias en relación al modelo de desarrollo que abraza cada uno de los países, verdadera causa de las discusiones binacionales respecto al complejo hidroeléctrico del Río Madera.

Brasil dispone de amplia experiencia en la construcción de hidroeléctricas (más de 2.000 represas construidas, de las cuales 650 son hidroeléctricas³⁹), empresas capaces de llevarlas a cabo con acceso a créditos en gran medida nacionales, una firme apuesta por el aprovechamiento de las potencialidades de su cuenca hidrográfica para la producción de electricidad, un Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) donde la producción de electricidad y la autonomía energética son uno de los pilares y un crecimiento de la demanda energética desmesurado que debe ser cubierto para conseguir mantener el crecimiento deseado en el país. El gobierno brasileño estima una demanda de energía eléctrica de 124.000 MW en 2012, siendo de 83.000 MW en 2002. Por otro lado, Bolivia no dispone de ninguna experiencia en la construcción de grandes megarepresas hidroeléctricas. Es cierto que 33% de la electricidad que abastece al Sistema

³⁹ 80% de la producción eléctrica de Brasil proviene de plantas hidroeléctricas.

Interconectado Nacional (SIN) proviene de plantas hidroeléctricas. No obstante, éstas son en cascada, no han implicado inundaciones ni expulsiones de comunidades de las magnitudes brasileñas, y la mayoría no producen más de 50 MW. De forma tal, que resulta totalmente incomparable, por ejemplo, la gestión de una planta hidroeléctrica boliviana con la Represa Hidroeléctrica de Itaipú en territorio brasileño y paraguayo. Itaipú, gestionada por Brasil, constituye una de las mayores represas del mundo, con una potencia instalada de 14.000 MW.

Pero ni siquiera la asimetría vigente en la capacidad técnica de gestionar megarepresas es suficiente para hacer de un país un impulsor de la hidroelectricidad. La verdadera diferencia que existe entre los dos países es la postura política y económica que se tiene al respecto. Relevamos aquí tres puntos incluidos en el PAC⁴⁰:

- **La generación de energía eléctrica para abastecer la demanda de las grandes urbes industriales del sur de Brasil y avanzar hacia la independencia energética del país, eliminando progresivamente la importación de gas e hidrocarburos.** Dentro de esta meta del gobierno brasileño se encuentra la explotación de sus ríos para la producción de hidroelectricidad y el uso de los suelos fértiles para la producción de agrocombustibles (biodiesel y etanol). Según el Gobierno Federal de Brasil y Eletrobrás, principal empresa de electricidad brasileña, el potencial hidroeléctrico del país se sitúa cerca de 260.000 MW mientras que actualmente tan sólo se producen 74.000 MW (28% de su potencial). Para alcanzar el potencial estimado se necesitan construir 1.443 represas, ya estudiadas e inventariadas.

- **La apertura de mercados en el oeste sudamericano y en los países asiáticos, especialmente China e India.** La agroindustria (sobre todo soja y caña de azúcar), las industrias de aluminio y acero, las maderas preciosas, la producción de celulosa y papel a partir de maderas amazónicas de menor costo y otras apuestas económicas brasileñas, deben abrirse camino y encontrar nuevos mercados. La construcción de represas y esclusas en los ríos del país, y en los de los otros países que se sitúan físicamente entre Brasil y sus mercados asiáticos, permitiría la navegación de grandes embarcaciones con las cuales transportar todos esos productos de creciente demanda que la Amazonía les brinda. La apertura de mercados se refiere tanto al acceso como al transporte de mercancías, convirtiendo al PAC en una parte del programa de IIRSA.

- **Aumentar la presencia brasileña a nivel geopolítico.**

La estrategia para conseguir una mayor presencia en el continente ha sido la de potenciar el “sello BRASIL” en todos los países brindando facilidades de actuación y de acceso a créditos a las empresas brasileñas. Así por ejemplo, en el caso de Itaipú, Brasil y Paraguay compartieron los gastos de construcción, pero fueron las empresas brasileñas quienes se beneficiaron, no sólo con la construcción sino también con la distribución de la electricidad, mientras que Paraguay continúa pagando la deuda contraída.

Por tanto, la política de Brasil se ubica en facilitar a sus grandes empresas y polos industriales el acceso a la energía, a los recursos naturales y a los mercados que el continente y el mundo les ofrece. La política de la vecina Bolivia es distinta. El Programa del Gobierno boliviano pretende asumir el principio del “Buen Vivir”. En la definición del “Buen Vivir” se contempla el acceso a la energía como un derecho y un insumo esencial para la economía y la calidad de vida de la gente que debe ser suministrada de manera confiable y a precios internos competitivos. Además, se considera la importancia de la energía tanto para la seguridad del país, como en términos de los inevitables impactos ambientales generados, que deben ser tenidos muy en cuenta al influir directamente en la calidad de vida de la población⁴¹.

De forma tal, que la soberanía sobre los recursos y el territorio constituye la principal meta del gobierno boliviano. El Plan Nacional de Desarrollo⁴² elaborado en 2006 culpa a las reformas estructurales y privatizaciones de los años noventa de la situación actual del país, donde tan sólo el 87% de la población urbana y un 33% de la rural tienen acceso a energía eléctrica. El cambio que pretende llevar a cabo el gobierno de Morales se sitúa en *“reestablecer la función protagónica y estratégica del Estado en el desarrollo y planificación de la industria eléctrica (...) con el objeto de garantizar el suministro eléctrico, asegurando el acceso universal a este servicio en forma sostenible y con equidad social”*. Este objetivo se sustenta en las cuatro siguientes estrategias:

- **Desarrollar la infraestructura eléctrica para atender las necesidades internas y generar excedentes para la exportación de electricidad.** Para llevar a cabo esta política se plantea aumentar la generación y capacidad de transmisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN) que prácticamente sólo atiende a 6 de las 9 capitales departamentales⁴³. De esa manera, se aspira brindar un servicio de calidad y confianza que pueda llegar también a

⁴⁰ Véase: <http://www.brasil.gov.br/pac/>

⁴¹ Véase: <http://www.masbolivia.com/programa-de-gobierno-2010-2015.pdf>

⁴² Véase: http://www.constituyentesoberana.org/3/propuestas/gobierno/11_Min_Planificacion_Plan_Nal_Development_Nal.pdf

⁴³ El territorio boliviano se encuentra subdividido en nueve Departamentos.

zonas rurales eliminando progresivamente la dependencia de diesel subvencionado de los sistemas aislados. Posteriormente, tras haber satisfecho las necesidades de la población, el objetivo es, en principio, de generar recursos mediante la exportación de electricidad a países vecinos.

- **Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural, para lograr la universalización de dicho servicio.** Se plantean facilidades y atenciones prioritarias a los sectores con menos recursos para que puedan acceder de manera digna a la electricidad, potenciando mecanismos de financiamiento sostenible que utilicen racionalmente todas las fuentes energéticas respetando el medio ambiente. Se trata también de conseguir el acceso de las zonas rurales alejadas implementando proyectos de suministro de energías alternativas que mejoren la calidad de vida y los ingresos económicos de la población rural.

- **Soberanía e independencia energética.** Para conseguir la soberanía se ha de consolidar primeramente la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, donde se ubican las fuentes de generación de electricidad. Además, se demuestra un especial interés por las energías renovables (generación hidroeléctrica, eólica y geotérmica) que garanticen la independencia energética del país dentro de una nueva matriz energética sostenible.

- **Consolidar la participación del Estado en el desarrollo de la industria eléctrica con soberanía y equidad social.** Se trata de asignar un papel estratégico y de mayor peso en el desarrollo integral del sector eléctrico a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y con ella al Estado. Con la participación estatal se busca: garantizar el suministro regulando a la industria eléctrica del país, interconectar el país y comenzar el programa de exportación de electricidad con soberanía y seguridad energética.

5.1. Tensiones respecto al “Complejo del Río Madera”

En el año 2004, cuando comenzaron los estudios de factibilidad y los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) de las represas, la empresa constructora Odebrecht S.A. y la eléctrica FURNAS, ambas brasileñas, cruzaron la frontera intentando obtener la licencia para realizar los EIAs de las dos represas que estaban proyectadas en territorio boliviano. Pero, personalidades e instituciones públicas y privadas lograron que se promulgase el Decreto Supremo (DS) 28389 por el cual en tanto no se concluyan los estudios de aprovechamiento integral de las cuencas hidrográficas del país, con priorización a las cuencas de los ríos Mamoré-Madera y Beni, “se suspende el tratamiento de solicitudes y consiguiente otorgamiento de licencias, licencias provisionales y concesiones en materia hidroeléctrica sobre esta cuenca⁴⁴”. Ante la derrota en territorio boliviano las empresas brasileñas retomaron las gestiones del lado brasileño consiguiendo la aprobación del proyecto y del EIA en septiembre 2006. Desde ese momento, el gobierno brasileño ha actuado suponiendo su derecho a construir las dos represas en su territorio sin consultar al gobierno de Bolivia sabiendo que dicha actuación crearía impactos sobre el territorio vecino, conociendo su voluntad de llevar a cabo un manejo integrado de esta importante cuenca e ignorando acuerdos y consejos internacionales que resguardan el curso natural de aguas transfronterizas y los pueblos

que en ellos habitan (Comisión Mundial de Represas 2000). Silas Rondeau, Ministro de Minas y Energía de Brasil, cerró una rueda de prensa diciendo “...no cabe acuerdo con Bolivia... en la medida en que las dos hidroeléctricas están en territorio de Brasil” (La Razón 23-01-07).

Paralelamente a la decisión legal boliviana de realizar un manejo integrado de cuencas se establecieron también en 2005 dos leyes que priorizaban la implementación de fuentes de energías alternativas en los Departamentos de Pando y Beni y a través de microcentrales hidroeléctricas⁴⁵, cuya potencia sea inferior a 10 MW. Los dos Departamentos regulados son los que concentran la mayor parte de la cuenca hidrológica del Río Madera y los que albergarían la construcción de las dos represas del Complejo Río Madera en territorio boliviano (la represa binacional y aquella de Cachuela Esperanza).

Es importante recordar que las relaciones entre las cancillerías (Ministerios de Relaciones Exteriores) de los dos países no se limitan a las tensiones asociadas al Complejo del Río Madera. Las exportaciones de gas de Bolivia hacia Brasil, fuertemente reducidas en 2009 de manera unilateral por Brasil, o las ayudas económicas para la construcción de carreteras en Bolivia, con claras intenciones de conectar el mercado brasileño con el del oeste sudamericano y el asiático, o la presencia de Petrobrás en el país andino, son otras de los temas tratados actualmente.

⁴⁴ Véase: <http://www.ae.gob.bo/userfiles/file/pdf/ml/28389.pdf>.

⁴⁵ Ley n° 3152 de 15 de agosto de 2005. Se declara de necesidad nacional la implementación de fuentes de generación de energías alternativas en el Departamento de Pando. Ley n° 3267 de 8 de diciembre de 2005. Declárase de prioridad nacional, la construcción de microcentrales hidroeléctricas (energía alternativa generada por movimiento de aguas en los ríos), en el departamento del Beni.

Ley n° 3279 de 9 de diciembre de 2005. Se declara de necesidad nacional la implementación de fuentes de generación de energías alternativas en el Departamento del Beni.

5.2. La Amazonia requiere energía: ¿cuánta y para qué?

La región amazónica en Bolivia vive una situación de escasez en términos de energía eléctrica a costos accesibles para la población. Además, la dependencia de las centrales termoeléctricas, y de los derivados de hidrocarburos que las alimentan en los sistemas aislados, no es sostenible actualmente. Bolivia se ve obligada a subvencionar el diesel para que las ciudades de la región amazónica puedan obtener energía eléctrica a un precio todavía altísimo en comparación con el resto del país conectado por el SIN. Las ciudades de Cochabamba, La Paz o Santa Cruz pagan unas tarifas de entre 0,48 y 0,60 Bolivianos/Kilo-Vatio-Hora (Bs/Kwh), mientras que en las ciudades del norte amazónico son de 0,90 Bs/Kwh en las ciudades de Cobija y Guayaramerín y de 1,5 Bs/Kwh en Riberalta (Mercado 2006)⁴⁶. Si el diesel no fuera altamente subvencionado en esta zona el precio se encarecería por lo menos 0,70 Bs/Kwh. Pero, ¿cómo se puede acceder a una energía propia que abastezca a toda la región?

La región amazónica brasileña está siendo utilizada para el comercio y no para la gestión sostenible de los pueblos que la habitan. En efecto, en dicha región, la energía es destinada a las diferentes industrias de la zona: la producción y transformación de los distintos agronegocios (soja, caña de azúcar, etanol, madera, papel, celulosa...) y la minería (hierro, aluminio, y oro). Estas empresas con claros intereses transnacionales no son creadoras de empleos, destruyen el medio ambiente y son dependientes de los mercados externos, ofreciendo un falso desarrollo para la región.

Bolivia tiene un consumo medio nacional cercano a los 1.000 MW y tal como lo señalamos anteriormente, el consumo conjunto de las tres principales ciudades

del norte-amazónico boliviano (Guayaramerín, Riberalta y Cobija) se acerca de 20 MW (J. Molina 2010). La construcción de Santo Antônio, Jirau e incluso de Cachuela Esperanza tal y como se plantea actualmente el Gobierno de Bolivia, indica un objetivo claramente mucho más cercano al modelo de desarrollo brasileño que al boliviano. Se calcula que gracias a las represas y la creación de la hidrovía asociada a éstas, además de los otros corredores del IIRSA, la capacidad de transporte a través de Bolivia llegue a 50 millones de toneladas por año.

El “Complejo del Río Madera” responde a muchos intereses, desde la industria, los intereses de los bancos, las empresas constructoras, las interesadas en el negocio del agua, los agronegocios y la minería. Incluso, si el sobrante de la enorme producción eléctrica fuera destinado a la población rural de la amazonía, podemos preguntarnos ¿cuál será el precio? En la licitación de la represa de Santo Antônio, la empresa Odebrecht S.A. propuso un precio de 65 Dólares estadounidenses/Megavatios (USD/MW)⁴⁷, razonable en el rango de precios brasileños que se encuentra entre 65 y 70 USD/MW, pero absurdo para los precios bolivianos donde la energía eléctrica del SIN es de 30-35 USD/MW. Si empresas como Odebrecht S.A. realizasen la construcción de las dos represas en territorio boliviano y suponiendo que se mantuviesen los precios de la energía durante los casi 10 años que llevaría la puesta en marcha de las represas, Bolivia debería consumir esa energía producida en su país a un precio incluso superior al actual dependiente de diesel subvencionado. A todo esto habría que añadir costes estructurales como la inexistencia de líneas de transmisión que deberán ser construidas, las plantas de disminución de tensión (de otro modo la energía de las represas deberá viajar a Brasil para volver de nuevo a Bolivia a otro precio) o el cambio de la frecuencia, distinta en los dos países (60 hertzios en Brasil y 50 en Bolivia).

⁴⁶ 1 Bs. (boliviano) equivale a 0.11 Euros

⁴⁷ 1 USD (Dólar estadounidense) equivale a 0.77 Euros

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Tal y como hemos podido constatarlo, IIRSA implica la interconexión con los centros urbanos y los puertos de exportación, de las zonas menos integradas de América del Sur, pero estratégicas del punto de vista de la extracción de recursos naturales y del tránsito de mercancías. Diseñada de acuerdo con una “visión de negocios”, prioriza una vinculación con los mercados globales. Si bien promueve activamente la inversión privada, en su seno cobra gran importancia el financiamiento público y consecuente incremento de la deuda externa de los países de la región. En el marco de IIRSA, se implementa actualmente el “Complejo del Río Madera”, mediante la construcción de las megarepresas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio en Brasil, y de Cachuela Esperanza en Bolivia, en un contexto conflictivo y donde se evidencian irregularidades del punto de vista de la legislación ambiental brasileña, así como de la transparencia en términos de la evaluación de las consecuencias sociales y ambientales reales.



Trabajadora de la industria de la castaña cocinando con madera, Riberalta, Bolivia, mayo de 2008 (Foto: ODG)

Examinando los impactos de Jirau y Santo Antônio, hemos destacado que tanto del punto de vista sociocultural como ambiental, son de una magnitud que no ha sido contemplada por las autoridades brasileñas, y que *afectan de manera sustancial al territorio boliviano, sin que ello sea reconocido por el Gobierno brasileño*. Es el caso, por ejemplo del régimen hidráulico, que implicará la sobre-elevación del agua en el tramo binacional, con el riesgo de inundar parte de la amazonía boliviana. Asimismo, señalamos que desde la primera etapa de construcción de Santo Antônio, se ha evidenciado la pérdida de fauna acuática e incrementado el riesgo de contaminación del agua por mercurio, lo cual puede implicar riesgos para la salud de los lugareños, tanto en la ingestión directa de agua, como mediante la pesca. Además, miles de familias bolivianas que viven de la pesca artesanal serán afectadas. La inundación implica también la pérdida de tierras para la producción agrícola y ganadera, y para la recolecta de castaña, que representa una fuente de trabajo real para gran parte de la población boliviana que habita la región. En el área de salud, hemos considerado la propagación de enfermedades infecciosas ya presentes en la región, que pueden extenderse gracias al estancamiento de aguas generado por las represas. Dadas las condiciones de marginación de la población local, que cuenta con escasos recursos y con un acceso a centros de salud muy reducido, su vulnerabilidad ante las enfermedades mencionadas es aún mayor. Por todo ello, la implementación del “Complejo del Río Madera” implicará una expulsión de las poblaciones locales y su migración hacia las zonas urbanas, realidad ya visible en el área de construcción de las represas en Brasil. Los impactos socioambientales afectarán también gravemente los territorios de diversos Pueblos indígenas. De acuerdo con la Comisión Mundial de Represas, creada en 1998 por el Banco Mundial y la Unión Internacional por la Conservación de la

Naturaleza, las represas hidroeléctricas a nivel global han desplazado entre 40 y 80 millones de personas, la gran mayoría de las cuales han sido condenadas a la pobreza. Además, las represas causan daños irreversibles a los ecosistemas, que a pesar de los esfuerzos, no han podido ser redimidos (IR 2010, 2). A partir de este enfoque, proveniente de un órgano conservador, debemos considerar la relación entre el empobrecimiento de las poblaciones afectadas por el “Complejo del Río Madera” y su desplazamiento.

La implementación del “Complejo del Río Madera”, incluyendo no solamente las represas de Santo Antônio y de Jirau, sino también aquella de Cachuela Esperanza, **vulnera y viola un considerable número de Principios y Artículos vigentes en Instrumentos y/o Declaraciones Internacionales que han sido firmadas, ratificadas y/o apoyadas por los Gobiernos de Brasil y de Bolivia**⁴⁸:

- Las Normas de Derecho de Aguas Internacionales
- La Convención Americana de Derechos Humanos
- El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
- El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos
- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales

- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007)⁴⁹
- La Convención de Diversidad Biológica de 1992
- La Declaración de Río sobre Medio ambiente
- La Constitución Federal de Brasil

Además, **en el ámbito nacional boliviano se incumplen:**

- La Constitución Política del Estado de Bolivia (2009), la cual determina que el Estado boliviano es el garante del bienestar, desarrollo, seguridad y protección de las personas, naciones, pueblos y comunidades bolivianos (*Título I, Capítulo Segundo de la CPE*), de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas originarios campesinos incluyendo la protección y respeto de los Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y no contactados (*Título II, Capítulo cuarto de la CPE*), así como del Derecho a la Salud, a la Propiedad y al Medio Ambiente (*Título II, Capítulo Quinto de la CPE*)
- El Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno

Y se demuestra una contradicción con el “Acuerdo de los Pueblos”, resultante de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, abril de 2010), y suscrito por el Gobierno de Bolivia⁵⁰.

⁴⁸ Una descripción completa de las Normas y Principios incumplidos se encuentra en Mamani (2009, 20-47).

⁴⁹ Seis artículos de ésta Declaración se refieren concretamente al “Consentimiento libre, previo e informado”, y dos de ellos prohíben toda política gubernamental sin el consentimiento de la comunidad indígena afectada. El Artículo 32, estipula que los Pueblos Indígenas no pueden ser desplazados de sus territorios ancestrales sin un consentimiento libre, previo e informado. A su vez, el Artículo 10 menciona que no puede haber desplazamiento sin una compensación justa y acordada, y en la medida de lo posible, manteniendo la opción de retorno (IR 2010, 5).

⁵⁰ Véase: <http://cmpcc.org/acuerdo-de-los-pueblos/>

Ante esta situación, recomendamos:

Al Gobierno de Brasil:

Que detenga la implementación del conjunto de los proyectos asociados “Complejo del Río Madera”.

Que opere una Auditoría ambiental independiente, sobre los daños sociales y ambientales producidos hasta la actualidad en el proceso de construcción de las represas de Santo Antônio y de Jirau.

Que realice una planificación de la producción de la energía eléctrica a partir de las necesidades reales de las poblaciones amazónicas, partiendo de un proceso de consulta e información de estas poblaciones.

Que opere una revisión del Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) adaptándolo al conjunto de Pactos y Convenios firmados y ratificados por Brasil, en los ámbitos de los Derechos Humanos, Derechos de los Pueblos Indígenas y la protección del medio ambiente.

Al Gobierno de Bolivia:

Que las autoridades bolivianas correspondientes manifiesten enérgicamente su oposición ante el Gobierno de Brasil por la implementación del “Complejo del Río Madera” por los impactos transfronterizos, y que recurran a todos los instrumentos de la legislación nacional e internacional vigentes para detener la construcción de las represas de Santo Antônio y de Jirau, asumiendo su responsabilidad en la defensa de la soberanía nacional y territorial.

Que asumiendo el carácter “plurinacional” afirmado por el actual Gobierno, se detenga el proyecto de construcción de la represa de Cachuela Esperanza, y se condicione la posible utilización de los recursos hídricos para la generación de energía eléctrica en la región del Norte Amazónico boliviano, a los siguientes procedimientos y principios:

- El respeto al Derecho de Autodeterminación y de consulta presente en la Constitución boliviana y reivindicado por las organizaciones indígenas.
- Un diagnóstico de las necesidades de las poblaciones locales en términos de energía eléctrica, realizado conjuntamente con las y los pobladores, con especial atención a las poblaciones indígenas y sus organizaciones, y con el objetivo de asegurar no solamente su soberanía energética, pero también su soberanía alimentaria.
- El informe completo de los impactos sociales y ambientales de los proyectos que se decida, de manera conjunta, implementar.
- La no afectación, bajo ningún concepto, de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas originarios, y de los Pueblos en situación de aislamiento voluntario y no contactados.

Que se ponga en marcha un proceso de participación y consulta con los pueblos y comunidades campesinas indígenas de manera informada y transparente, devolviéndoles así su derecho a la autodeterminación y a diseñar un modelo de desarrollo propio.

En este informe hemos constatado además, que en la implementación del “Complejo del Río Madera” intervienen empresas constructoras que ya cuentan con un historial de conflictos sociambientales y de denuncias por corrupción, no únicamente en Brasil, sino también en otros países. Se ha considerado asimismo el papel activo que ha jugado, en el financiamiento del proyecto, el **Banco Santander**, el cual llegó a tener 10% de las partes del Consorcio que obtuvo la licencia para la construcción de la represa de Santo Antônio, habiendo además contemplado participar en la construcción de Jirau. Probablemente a raíz de la presión de la sociedad civil, el Banco disminuyó su participación, hasta vender la totalidad. No obstante, mantiene un papel importante, ya que es el “Banco-Agente”, liderando al grupo de entidades bancarias que financian a Santo Antônio. El protagonismo del Santander en este caso indica el incumplimiento de las Convenciones y Protocolos Internacionales a las cuales pretende acogerse de acuerdo con su propia política de “Responsabilidad Social y Ambiental”, además de los “Principios de Ecuador”, que ha suscrito, y que indican la necesidad de verificar la sostenibilidad de los proyectos de alto y medio impacto socioambiental antes de proceder al financiamiento. Ante esta situación, concluimos que **el papel del Banco Santander en el “Complejo del Río Madera” constituye un caso flagrante de antiooperación española, y de financiamiento irresponsable.**

Destacamos **la no-intervención del Gobierno español en el caso del Madera**, lo cual se sitúa en contradicción con el Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012)⁵¹, y en particular con el principio asumido de **“Coherencia de Políticas para el Desarrollo”**. Además, este Gobierno ha firmado y ratificado un número importante de Instrumentos y/o Declaraciones Internacionales, que son incumplidos en el caso de Madera con complicidad del Santander. Entre ellos, destacamos:

- El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos
- El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
- La Declaración Universal de los Derechos Humanos
- El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales
- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
- La Convención de Diversidad Biológica de 1992
- La Declaración de Río sobre Medio ambiente
- La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas
- La Declaración Tripartita Empresas Multinacionales y Política Social de la OIT

Peor aún, la actual política gubernamental de respuesta a la crisis económica tiene, entre sus componentes principales, **el apoyo con fondos públicos a las empresas españolas, buscando promover su internacionalización**. Tal es el sentido de la Ley de Economía Sostenible, que incluye cláusulas para facilitar el acceso del capital español a los mercados emergentes y aquellos de elevada renta per cápita. A su vez, la Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española, aprobada el 10 de junio de 2010, ha creado el Fondo de Internacionalización de la Empresa Española (FIEM), que incrementará en gran medida la Deuda externa, ofreciendo créditos a los gobiernos y empresas de países terceros que adquieran los bienes y servicios de las empresas españolas⁵². Estas políticas son implementadas sin tener en cuenta que 9 de las 27 empresas europeas juzgadas en Madrid en mayo del 2010, ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, eran españolas. Fueron denunciadas por violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y de los derechos de los Pueblos. Así, la irresponsable participación financiera del Santander en el “Complejo del Río Madera”, no es una excepción, sino más bien una práctica reiterada en el actuar de las empresas transnacionales españolas en los países del Sur.

⁵¹ Véase: http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/descargas/Plan_Director_2009-2012.pdf

⁵² En el Estado español, la **Campaña por la Abolición de la Deuda Externa y el reconocimiento de la Deuda Ecológica “¿Quién debe a Quién?”** realiza una labor de seguimiento y denuncia de las políticas de generación de ambos tipos de deuda y de los conflictos socioambientales generados por las transnacionales españolas. Su labor en torno a FIEM puede ser consultada en el siguiente enlace: http://www.quiendebeaqui.org/spip.php?rubrique54#pagination_last_articles.

Ante esta situación, recomendamos:

Al Gobierno español:

Que intervenga ante el Banco Santander para que detenga completamente su participación en el financiamiento del “Complejo del Río Madera”, como “Banco-Agente”.

Que admita que con su actual política de apoyo a la “internacionalización de la empresa española” con fondos públicos, anticoopera, es decir, interfiere negativamente en el bienestar de las poblaciones más empobrecidas.

Que se abstenga de apoyar con fondos públicos a las empresas españolas, mientras no haya creado, en la brevedad posible y con la participación de la sociedad civil, los mecanismos necesarios para el monitoreo de las actividades de estas empresas en el exterior, contemplando instrumentos de sanción por los impactos sociales, ambientales, económicos y laborales generados ante todo en los países más empobrecidos. Estos mecanismos deben además permitir el **cumplimiento obligatorio (y no únicamente voluntario)** por parte de las empresas españolas, de los Instrumentos y Pactos Internacionales firmados y ratificados por el Estado español.

BIBLIOGRAFIA

Barabas, A. y Bartolomé, M. "Mediation of Self-Management: Large Dams, Social Movements and Ethnicity". MacDowel, C. (Ed.). Understanding Impoverishment. The Consequences of Development-Induced Displacement. Oxford: Berghahn Books, 1996, p. 151-168.

Barreda, A. "Análisis geopolítico del contexto regional". En: Molina, P. y Vargas, M. (Eds.). Geopolítica de los recursos naturales y acuerdos comerciales en Sudamérica. La Paz: Fobomade, 2005a, p. 11-40.

--- "Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales". Boletín OMAL [en línea]. 2005b, núm. 10 [Consulta: 9 de julio de 2009]. Disponible en: <<http://www.alainet.org/active/10174&lang=es>>.

Banco Santander. "Informe Anual 2008" [en línea]. 2008 [Consulta: 5 de mayo de 2009]. Disponible en: <<http://www.santander.com>>.

--- "Presentación de Actividad y Resultados Primer Trimestre 2009" [en línea]. 2009 [Consulta: 5 de mayo de 2009]. Disponible en: <<http://www.santander.com>>.

BIC - Bank Information Center. "El Complejo Hidroeléctrico del Río Madera" [en línea]. 2009 [Consulta: 5 de mayo de 2009]. Disponible en: <<http://www.bicusa.org/es/Project.10138.aspx>>.

--- "UHE Santo Antônio" [en línea]. 2010a [Consulta: 5 de mayo de 2010]. Disponible en: <<http://www.bicusa.org/es/Article.11709.aspx>>.

--- "UHE Jirau" [en línea]. 2010b [Consulta: 5 de mayo de 2010]. Disponible en: <<http://www.bicusa.org/es/Article.11710.aspx>>.

BID - Banco Interamericano de Desarrollo. "BID aprueba US\$120 millones para proyecto de biocombustibles en Brasil", Comunicado de Prensa del 25 de julio de 2007.

--- "Un nuevo impulso a la integración de la infraestructura regional en América del Sur" [en línea]. 2000 [Consulta: 1 de julio de 2009]. Disponible en: <<http://www.iadb.org>>.

BNDES - Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. "El apoyo de Brasil a los Proyectos en Sudamérica" [en línea]. 2007 [Consulta: 3 de junio de 2009]. Disponible en: <www.iirsa.org>.

Banktrack. "Rio Madeira Dam Project" [en línea]. 2009 [Consulta: 6 de mayo de 2009]. Disponible en: <http://www.banktrack.org/show/dodgydeals/rio_madeira_dam_project>.

BICECA. "Megaproyecto: Conjunto de Sub-proyectos Complejo Río Madera" [en línea]. 2008 [Consulta: 3 de marzo de 2009]. Disponible en: <<http://www.biceca.org/es/Project.Overview.138.aspx#Biblioteca>>.

Cabezas, J. y Flores, F. "El problema de la salud del Norte Amazónico y su relación con las represas del Río Madera". En: Molina, P. (Coord.). El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del Río Madera. La Paz: Fobomade, 2007, p. 85-94.

CLAES - Centro Latinoamericano de Ecología Social. "Megaproyectos, Geopolítica y Desarrollo Sostenible", Taller a distancia, documento de Estudio Nº 2 [en línea]. 2009 [Consulta: 2 de junio de 2009]. Disponible en: <<http://www.megaproyectos.org>>.

CAF - Corporación Andina de Fomento. Vías para la integración. Acción de la CAF en la infraestructura sostenible de Sudamérica. Caracas: CAF, 2000.

Craide, S. "Malária aumenta 63% em distrito de Porto Velho por causa de construção de usinas no Rio Madeira" [en línea]. 17 de agosto de 2009 [Consulta: 30 de mayo de 2010]. Disponible en: <<http://www.ecodebate.com.br/2009/08/17/malaria-aumenta-63-em-distrito-de-porto-velho-por-causa-de-construcao-de-usinas-no-rio-madeira/>>

Comisión Mundial de Represas. Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones. Una síntesis [en línea]. 2000 [Consulta: 2 de junio de 2009]. Disponible en: <<http://www.dams.org>>.

Constitución Política del Estado. Versión oficial. La Paz: UPS Editorial, 2007 (aprobada en enero de 2009).

Furtado, F. "Quem financia uma obra tao polêmica?". En: Switkes, G. (Coord.) y Bonilha, P. (Ed.). Águas Turvas. Aleras sobre as conseqüências de barrar o maior afluente do Amazonas. São Paulo: International Rivers, 2008, p. 26-27.

García, E., Maeso, V., Reyero, P., y Vargas, M., "El Complejo del Río Madera (Brasil-Bolivia)". En: Fernández, M. (Coord.). Las represas en América Latina. Barcelona: ESF (en proceso de publicación), 2009.

Giménez, G. "Territorio y Cultura". Estudios sobre las culturas contemporáneas, Universidad de Colima, 1996, Época II, Vol. II, Nº 4, p. 9-30.

Global Witness. Undue diligence: How banks to business with corrupt regimes [en línea]. 11 de marzo de 2009 [Consulta: 20 de abril de 2009]. Disponible en: <http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/735/en/undue_diligence_how_banks_to_business_with_corrupt>.

GRAIN. Seedling. Agrofuels special issue, Ed. GRAIN, Barcelona, 2007.

Greenpeace. Devorando la Amazonía [en línea]. 2006 [Consulta: 4 de mayo de 2007]. Disponible en: <www.greenpeace.org/forests>.

González, J. "Los frentes culturales. Culturas, mapas, poderes y luchas por las definiciones legítimas de los sentidos sociales de la vida". Estudios sobre las culturas contemporáneas, Universidad de Colima, 1987, Vol. 1, N°3, p. 5-43.

Goulart, J. "Jirau: engenheiros estimam gasto 60% maior". Valor Online [en línea]. Abril de 2009. [Consulta: 4 de mayo de 2009]. Disponible en: <<http://www.bicusa.org/es/Article.11191.aspx>>.

Gudynas, E. y Buonomo, M. Integración y Comercio. Diccionario latinoamericano de términos y conceptos. Montevideo: CLAES-Coscoroba Ediciones, 2007.

Holt-Giménez, E. "Biocombustibles: mitos de la transición de los agro-combustibles", Revista electrónica Biodiversidad en América Latina [en línea]. 3 de septiembre de 2007 [Consulta: 4 de mayo de 2008]. Disponible en: <<http://www.biodiversidadla.org/layout/set/print/content/view/full/35033>>.

IPCC - Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Summary for Policymakers. The Physical Science Basis. Working Group 1 Contribution to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

IR - International Rivers. Protecting Rivers and Rights. The World Commission on Dams Recommendations in Action. Briefing Kit. Berkeley: International Rivers, 2010.

Joh, A. "Impactos socioambientales del Complejo del Río Madera". Intervención el 21 de junio de 2008 ante la Junta de Accionistas del BSCH, Santander.

Keene, B. "Ecuador: Avanza en la lucha contra la deuda ilegítima". Agencia Latinoamericana de Información [en línea]. 25 de noviembre de 2008 [Consulta: 4 de mayo de 2009]. Disponible en: <<http://alainet.org/active/27620&lang=es>>.

León, E. "Notas sobre la Amazonía legal brasileña". 2004. Documento mecanografiado, México D.F. [Biblioteca de CASIFOP].

--- Revalorización capitalista de la Amazonía. Geopolítica y gestión estratégica de la riqueza biológica amazónica brasileña. Tesis de Maestría en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Postgrado en Estudios Latinoamericanos, 2005 [Biblioteca del ODG].

--- Energía amazónica. La frontera energética amazónica en el tablero geopolítico latinoamericano. Tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, Postrado en Estudios Latinoamericanos, 2007 [Biblioteca del Postrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM].

Llistar, D. "Anticooperación: los problemas del Sur no se resuelven con ayuda internacional". Revista Pueblos [en línea]. 8 de enero de 2008 [Consulta: 1 de agosto]. Disponible en: <http://www.revistapueblos.org/spip.php?article730&var_recherche=llistar>.

--- Anticooperación. Interferencias Norte-Sur. Barcelona: Editorial Icaria, 2009.

MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens. "Hidroelétricas no rio Madeira: energia para quê e para quem?". Cartilla de Estudio. 2ª Edición [en línea]. Diciembre. 2008a [Consulta: 1 de agosto de 2009]. Disponible en: <<http://www.mabnacional.org.br/>>

--- "MAB protesta contra modelo energético e do agronegócio". Jornal do MAB. Junio. 2008b [Consulta: 1 de agosto de 2009]. Disponible en: <www.mabnacional.org.br/materiais/jornal_mab_0608.pdf>

MacDowel, C. (Ed.). Understanding Impoverishment. The Consequences of Development-Induced Displacement. Oxford: Berghahn Books, 1996.

Maeso, V. "Presentación del caso del Banco Santander". Intervención el 15 de mayo de 2008 (a) en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Lima.

Maeso, V. "O papel dos grandes bancos espanhóis no financiamento de projetos em litígio na América Latina". En: Verdum, R. (Ed.) Financiamento e Megaprojetos. Uma interpretação da dinâmica regional sul-americana. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2008b.

Mamani, E. "Derechos Humanos, Estado y represas del Río Madera: entre la teoría y la realidad". En: Molina, P. (Coord.), Matias, A., Mamani, E., Novoa, L., Molina, J., Ledezma, F., Vauchel, P., Canese, R. Bajo el Caudal. El impacto de las represas del Río Madera en Bolivia. La Paz: Fobomade, 2009, p. 15-60.

Martínez Alier, J. El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Barcelona: Editorial Icaria, 2004.

--- "Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad". Polis, Revista de la Universidad Bolivariana [en línea]. 2006, Vol. 5, N° 013 [Consulta: 10 de agosto de 2009]. Disponible en: <<http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=30551307>>.

Matias, A. "El impacto de la construcción de represas en las enfermedades de transmisión vectorial". En: Molina, P. (Coord.), Matias, A., Mamani, E., Novoa, L., Molina, J., Ledezma, F., Vauchel, P., Canese, R. Bajo el Caudal. El impacto de las represas del Río Madera en Bolivia. La Paz: Fobomade, 2009, p. 79-93.

- Mendes Dos Santos, G. "Pesca e ictiofauna no Rio Madeira". En: Switkes, G. (Coord.) y Bonilha, P. (Ed.). Águas Turvas. Aleras sobre as consequências de barrar o mayor afluente do Amazonas. São Paulo: International Rivers, 2008, p.94-137.
- Molina, J., Ledezma, F. y Vauchel, P. "Estudio del Río Madera: remanso hidráulico y sedimentación". En Molina, P. (Coord.), Matias, A., Mamani, E., Novoa, L., Molina, J., Ledezma, F., Vauchel, P., Canese, R. Bajo el Caudal. El impacto de las represas del Río Madera en Bolivia. La Paz: Fobomade, 2009, p. 97-161.
- "¿Es viable el proyecto Cachuela Esperanza?". Servicio de noticias ambientales de Fobomade [en línea]. 12 de febrero de 2010 [Consulta: 20 de febrero de 2010]. Disponible en: < <http://fobomade.org.bo/bsena/?p=89>>.
- Molina, P. "Presentación". En: Molina, P. (Coord.), Matias, A., Mamani, E., Novoa, L., Molina, J., Ledezma, F., Vauchel, P., y Canese, R. Bajo el Caudal. El impacto de las represas del Río Madera en Bolivia. La Paz: Fobomade, 2009a, p. 5-8.
- Molina, P. (Coord.), Matias, A., Mamani, E., Novoa, L., Molina, J., Ledezma, F., Vauchel, P., y Canese, R. Bajo el Caudal. El impacto de las represas del Río Madera en Bolivia. La Paz: Fobomade, 2009b.
- Novoa, L. "La infraestructura al servicio de la integración de los capitales: una mirada hacia el sector eléctrico del Brasil". En Molina, P. (Coord.), Matias, A., Mamani, E., Novoa, L., Molina, J., Ledezma, F., Vauchel, P., Canese, R. Bajo el Caudal. El impacto de las represas del Río Madera en Bolivia. La Paz: Fobomade, 2009, p. 63-75.
- Ortega, M. (Coord.). La deuda ecológica española: impactos ecológicos y sociales de las inversiones españolas en el extranjero. Sevilla: Muñoz Moya Editores Extremeños, 2006.
- Olivo García, J. La Iniciativa IIRSA y el ordenamiento del territorio continental [en línea]. 2008 [Consulta: 10 de febrero de 2009]. Disponible en: <<http://www.megaproyectos.org/conceptos/OlivoGarciaIniciativaIirsaPeru08.pdf>>.
- Pimentel, G. "IIRSA en Brasil. Caso Río Madeira". Documento powerpoint presentado en el Taller sobre IIRSA organizado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) el 18 y 19 de febrero de 2008, La Paz.
- Project Finance. "Brazil's Madeira hydro plants reach close" [en línea]. 16 de marzo de 2009 [Consulta: 20 de marzo de 2009]. Disponible en: <<http://www.projectfinancemagazine.com/default.asp?page=7&PubID=4&ISS=25325&SID=718345>>.
- Revista Ecología Política [en línea]. 2006, Nº 31 [Consulta: 20 de mayo de 2008]. Disponible en: < <http://www.ecologiapolitica.info/ep/anteriores.htm>>.
- Ribera, Marco Octavio. Las megarepresas del Rio Madera: ¿Qué pasará con la Amazonía boliviana? [en línea]. Investigación a cargo de LIDEMA, Bolivia. Mayo de 2010 [Consulta: 30 de mayo de 2010]. Disponible en: <<http://www.plataformaenergetica.org/system/files/MEGAREPRESAS%20Y%20RIO%20MADERA.pdf>>.
- Salomón, M. "Obra de hidrelétrica deixa 11 Ton de peixes mortos". Folha de São Paulo, 18 de diciembre de 2008.
- Santos, M. La Naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona, Editorial Ariel, 2000.
- Switkes, G. "A pedra fundamental da IIRSA". En: Switkes, G. (Coord.) y Bonilha, P. (Ed.). Águas Turvas. Aleras sobre as consequências de barrar o mayor afluente do Amazonas. São Paulo: International Rivers, 2008, p. 16 – 49.
- Switkes, G. (Coord.) y Bonilha, P. (Ed.). Águas Turvas. Aleras sobre as consequências de barrar o mayor afluente do Amazonas. São Paulo: International Rivers, 2008.
- Tautz, C. "La represa del río Madera". Le Monde Diplomatique / El Dipló/ Edición boliviana, marzo 2009, p. 5-6.
- Vargas, M. Las venas del ALCA: Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Bolivia, un país de tránsito y de extracción de recursos. La Paz: Fobomade, 2003.
- (Coord.) Agrocombustibles: ¿otro negocio es posible? Barcelona: Editorial Icaria, 2009.
- Vargas, M. y Molina, P. (Eds.). Geopolítica de los recursos naturales y acuerdos comerciales en América Latina. La Paz: Fobomade, 2005.
- Verdum, R. (Ed.) Financiamento e Megaprojetos. Uma interpretação da dinâmica regional sul-americana. Brasília: Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2008.
- Mercado, Y. "Proyectos Hidroeléctricos, Río Madera". Presentación powerpoint elaborada para el Viceministerio de Electricidad y energías alternativas de Bolivia, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia. La Paz, diciembre de 2006.
- Villegas, P. "Destrucción de la Amazonía: Brasil aprueba EIA de represas que inundarán territorio boliviano". En: Molina, P. (Coord.). El Norte Amazónico de Bolivia y el Complejo del Río Madera. La Paz: Fobomade, 2007, p. 117 – 126.
- Wiziak, J. y Brito, A. "Bancos desistem de projetos do Madeira". Folha de São Paulo, diciembre de 2008.
- Zibechi, R. "IIRSA: la integración a medida de los mercados". Revista Ecología Política, 2006, Nº 31, p. 19-26.

ANEXOS

ÍNDICE

- 1. Nota de prensa** “Represión en Brasil ante protestas por represas financiadas por el Banco Santander (14 de marzo de 2009)
- 2. Intervención en la Junta de Accionistas del Santander** – Setem – Campañas “Finanzas éticas” (19 de junio de 2009)
- 3. Carta al Director General de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria** (30 de julio de 2008)

1. NOTA DE PRENSA

14 de marzo 2009 – Día Internacional contra las presas y por los Ríos, el Agua y la Vida

Represión en Brasil ante protestas por represas financiadas por el Banco Santander

*El 13 de marzo de 2009 la policía federal de Porto Velho (Brasil) reprimió con gases lacrimógenos una manifestación pacífica de los afectados por el complejo Río Madeira. Los manifestantes protestaban por la construcción de las megapresas hidroeléctricas que tendrán graves consecuencias sociales en la población local y un devastador impacto medioambiental en la Amazonia brasileña-boliviana y en cuya financiación participa el **Banco Santander***

(La Paz, Riberalta, Madrid, Barcelona, 18/3/09).- El 13 de marzo, en vísperas del **Día Internacional contra las presas y por los Ríos**, el Agua y la Vida, tuvo lugar en la ciudad brasileña de Porto Velho una marcha pacífica protagonizada por los afectados por las represas del Río Madeira. **Mujeres y hombres de todas las edades recorrieron 5 Km.** hasta llegar al INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) donde reclamaron sus derechos. En ese punto, la **marcha pacífica fue duramente reprimida por la policía federal que detuvo a 6 manifestantes de nacionalidad boliviana.** La policía contó con la ayuda del personal de seguridad de Odebrecht, empresa constructora y una de las principales beneficiarias del proyecto, mostrando a los asistentes la defensa conjunta entre gobierno y empresa del modelo de crecimiento económico para el país.

Varias personas del país vecino se desplazaron a Porto Velho por tener evidencias que las represas brasileñas también tendrán efectos del lado boliviano de la frontera. **Entre los seis detenidos, y deportados esa misma noche, se encuentra Manuel Lima**, castaño, ex Secretario Ejecutivo de la Federación de Campesinos de Pando y actual presidente y coordinador del Foro Boliviano por el Medio Ambiente y el Desarrollo (FOBOMADE) en ese mismo departamento. Este luchador social presentó hace un año un recurso contra el gobierno de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conjuntamente con la Central Indígena del Oriente Boliviano. **También fue deportada Doris Domínguez**, Ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y luchadora del Movimiento Social en Defensa de la Cuenca del Río Madeira que reúne a las organizaciones sociales amazónicas de Bolivia con el Movimiento de Afectados por las Represas (MAB) y el Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil.

CONTEXTO DEL COMPLEJO RIO MADEIRA

El Complejo del Río Madera proyecta la construcción de 4 represas hidroeléctricas (2 en territorio brasileño, 1 en territorio boliviano y una en aguas binacionales) dotadas de esclusas, haciendo navegables los ríos Madeira, Madre de Dios y Beni. Esta hidrovía de 4200 Km. permitirá completar la navegación de grandes embarcaciones desde la desembocadura del Río Amazonas en el Océano Atlántico hasta casi los peruanos en el Pacífico, cruzando a través de territorio boliviano. A día de hoy ya se han comenzado las obras de las 2 centrales en territorio brasileño, Santo Antonio y Jirau, con capacidad de generación de 3.150 MW y 3.300 MW respectivamente. El día anterior a la marcha contraria a su construcción, el presidente Lula sobrevoló las obras reafirmando la postura del gobierno y desoyendo a las familias afectadas,

La construcción de la represa de Santo Antonio está a cargo del consorcio MESA formado por las constructoras Odebrecht y Furnas y un fondo de inversión creado por el **Banco Santander** y BANIF Portugal. Ya en varias ocasiones organizaciones como el MAB, SETEM o el ODG advirtieron a la entidad financiera española, y a sus accionistas, de los estragos que provocaría la construcción de represas de tal magnitud,

Entre los graves impactos sociales y ambientales que implica la implementación de estas megainfraestructuras, se destacan: la inundación de una de las zonas con mayor biodiversidad de América del Sur, la destrucción de territorios indígenas y campesinos tanto en Bolivia como en Brasil y el consecuente desplazamiento de miles de personas, los impactos sobre la pesca, que permite la supervivencia de los pobladores locales, y finalmente el aumento de enfermedades endémicas como la malaria o el dengue, debido al estancamiento de aguas que implicarán las represas.

MOVILIZACIÓN Y PETICIONES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Las organizaciones firmantes consideran inaceptable:

- **Que en el contexto de la actual crisis medioambiental global que vive nuestro planeta se sigan construyendo megarepresas de las características del Complejo Río Madeira**, dado que las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las represas constituyen 7% del impacto total del calentamiento global.
- **Que en el actual contexto de crisis financiera, bancos privados como el Banco Santander sigan invirtiendo de manera social y ambientalmente irresponsable.**

Por estas razones, estas organizaciones solicitan:

- **Que el Gobierno de Brasil** detenga las obras de las centrales de Jirau y Santo Antonio, al mismo tiempo que pone en marcha un verdadero proceso de diálogo con las organizaciones campesinas, indígenas y de afectados por el proyecto, así como otros miembros y movimientos de la sociedad civil, de Brasil y Bolivia, para plantear y discutir alternativas al modelo energético que se está promoviendo en la región amazónica con irreversibles impactos medioambientales y sociales.
- **Que el Gobierno de Brasil** deje de reprimir a la población civil que lucha por los Derechos Humanos y por el Derecho a un Medio Ambiente saludable.
- **Que el Banco Santander** haga pública la información del estudio que lleva actualmente a cabo sobre el impacto medioambiental y social de la represa de Santo Antonio en el Río Madeira y su consiguiente abandono de la financiación del proyecto.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

- **BRASIL:** Movimiento de las personas afectadas por las Presas (MAB, siglas en portugués)
- **BOLIVIA:** Fundación Red Nacional de Acción Ecológica - RENACE (Bolivia), Centro de Servicios Agropecuarios y Socio-Comunitarios – CESA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado-CIPCA
- **ESTADO ESPAÑOL:** Ecologistas en acción, Edpac (Educación para la Acción Crítica), Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad, Amigos de la Tierra, Entrepobles, SETEM, Veterinarios sin Fronteras y Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització.

2. SETEM CAMPAÑAS – FINANZAS ÉTICAS

Intervención durante la junta de accionistas del Santander (19 junio 2009)

Buenos días señoras y señores accionistas. Agradezco la oportunidad que el Consejo de Administración me brinda para expresarme en esta asamblea ya que mi intervención incluye la de muchas personas accionistas que han delegado en mí su voz.

Mi nombre es Annie Yumi Joh y soy responsable del área de Finanzas Éticas en SETEM, una ONG de Desarrollo que **revela** los impactos sociales y ambientales de los bancos españoles y **defiende los derechos humanos en los países empobrecidos**.

Tras nuestra intervención en la última Junta de Accionistas de 2008, a propósito del Proyecto Río Madeira –que les explicaré a continuación–, el Sr. Botín declaró textualmente “en la junta del año que viene daremos cumplida cuenta de lo que estamos haciendo, es un tema muy importante. Tenemos una calificación muy alta de sostenibilidad en medio ambiente y la mantendremos.”

Desde entonces, el Banco Santander ha puesto en marcha una nueva política social y ambiental aprobada el pasado 28 de abril 2009. Ha creado un Comité de Sostenibilidad, que refleja que desde el Consejo de Administración hay interés por esta materia. Además el Santander ha suscrito recientemente los Principios de Ecuador, que obligan a los bancos a rechazar proyectos insostenibles.

En mi intervención, sin embargo, trataré de hacerles ver nuevamente que la financiación por parte del Banco Santander del Complejo Hidroeléctrico Río Madeira, situado en Brasil, no es compatible con la política que se quiere desarrollar ni con los Principios de Ecuador, suscritos por su entidad.

Les recuerdo que el “Complejo hidroeléctrico del Río Madeira”, consiste en la construcción de 4 presas en dicho río, el afluente más caudaloso del Amazonas. La ejecución de la primera presa, Santo Antonio, ya está teniendo graves consecuencias para la población local y el entorno natural.

A continuación desgloso algunos puntos de la recién aprobada Política Global del Grupo Santander:

- En cuanto al punto de **“conservación de la biodiversidad”**: desde julio 2007, la deforestación de la zona de construcción de la primera presa ha sido de un 600% y el inicio de las obras causó la muerte de 11 toneladas de peces.
- Sobre **“prevención de la contaminación y la emisión de residuos tóxicos”**: la zona del Río Madeira tiene un elevado contenido de mercurio por lo que, al remover con las obras el lecho del río, la población está siendo expuesta a ingerir agua y peces contaminados.
- Sobre **“la salud y seguridad de la comunidad”**: además de los efectos causados por el mercurio, existe otro grave riesgo para la salud y la seguridad de la comunidad que es la Malaria. Las grandes extensiones de agua estancada dispararán su proliferación y empeorarán la calidad del agua potable.

¹ Complex Project, Mega Risks. Amigos da Terra Amazonia Brasileira. Febrer 2008

² “Obra de hidrelétrica deixa 11 t de peixes mortos.” Marta Salomon. Folha de São Paulo. Dezembro 2008

- En cuanto al punto de **“adquisición de tierras y reasentamiento voluntario”**: actualmente el futuro de 2.400 pescadores/as de la región está en peligro y hasta 5.000 familias se desplazarán sin que esté prevista compensación alguna.” El proceso de consulta y consentimiento previo, uno de los Principios de Ecuador, no se ha realizado adecuadamente.

- Sobre **“pueblos indígenas y patrimonio cultural.”** La ejecución del Complejo Río Madeira rompe con los convenios nacionales e internacionales como la Convención 169 de la OIT, la Declaración de Pueblos Indígenas de OEA e NNUU y los artículos 215 y 216 de la Constitución Federal y el Decreto 6040/2007.

Por último, el pasado 13 de marzo la policía federal de Porto Velho, en Brasil, con la ayuda de la empresa constructora, reprimió de forma violenta y desproporcionada una manifestación pacífica de las personas afectadas por el complejo Madeira, hecho que ha sido cuestionado duramente por organizaciones como el Movimiento de Afectados por Presas en Brasil.

Ante la gravedad de estos hechos, estamos seguros de que el Santander estará de acuerdo en que el Complejo Río Madeira no respeta su propia política social y ambiental y por tanto desde SETEM les pedimos a Ustedes, miembros del Consejo de Administración, como co-propietarios del consorcio que hagan público el contenido del último informe realizado por Environmental Resources Management, para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Principios de Ecuador. De esta manera podrán afirmar ante la sociedad, ante sus clientes, personal contratado y accionistas que el Banco Santander es un banco transparente que responde a los intereses de sus accionistas.

Solamente añadir que SETEM ofrece su total disposición al Consejo de Administración y que estaremos encantados de ampliar esta información a todos sus accionistas. Muchas gracias por su atención.

³ *Levante contra a venda do Rio Madeira. Movimento dos Atingidos por Barragens.*

⁴ *Violações de Direitos Humanos Ambientais no Complexo Madeira. Plataforma Dhesca Brasil. Abril 2008*

3. CARTA AL DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y ACCIÓN HUMANITARIA

Agència Catalana de Cooperación al Desarrollo (30 julio 2008).

Sr. David Minoves
Director General de
Cooperación al Desarrollo
i Acció Humanitària

Barcelona, 30 de julio de 2008

Asunto: Construcción de represas hidroeléctricas sobre el Río Madera

Estimado Señor,

Les escribimos profundamente preocupados por la implementación del Proyecto Complejo Hidroeléctrico del Río Madera en la Amazonía boliviano-brasileña. Queremos llevar a su conocimiento este caso debido a que afecta potencialmente una de las zonas donde operan ONGs catalanas contando para ello con el apoyo de la ACCD en Bolivia.

El Complejo proyecta la construcción de una hidrovía de 4.200 km de largo que haría posible la navegación de grandes embarcaciones en los Ríos Madera, Madre de Dios y Beni. Se trata también de aprovechar el potencial de generación eléctrica a partir de estos caudalosos ríos, mediante cuatro represas hidroeléctricas con esclusas para la navegación. Los estudios proponen la construcción de las centrales hidroeléctricas de Jirau y Santo Antonio, en el tramo entre las localidades brasileñas de Abuná y Porto Velho (véase Mapa en adjunto). En términos de capacidad de generación, la represa de Santo Antonio producirá 3.150 MW y la de Jirau, 3.300 MW. Ambas han sido licitadas y la primera se encuentra en fase de preparación. El costo total de las dos represas alcanza los 16.000 millones de dólares. El Banco Santander Central Hispano (BSCH) ha ganado, junto al banco portugués BANIF, la subasta de la presa de Santo Antonio. La tercera central hidroeléctrica se encuentra en un estado mucho menos avanzado. Aprovecharía el desnivel de algo más de 20 metros que existe en el tramo binacional Abuná-Guayaramerín. A su vez, la cuarta represa hidroeléctrica del Complejo se situaría en territorio boliviano, en las inmediaciones de la localidad de Cachuela Esperanza. Resulta paradójico el considerar que la esta última represa podría tener una generación de 800 MW, mientras que la ciudad aledaña de Riberalta, que sería afectada por la inundación, consume actualmente 5 MW.

Queremos recordar aquí que a pesar de su carácter conservador, el Informe Final de la Comisión Mundial de Represas (CMR), conformada por representantes de la industria de las represas y de los movimientos anti-represas causó gran repercusión en el año 2000. Constituyó una clara denuncia de los impactos sociales y ambientales, así como de la ineficiencia que han tenido estas megainfraestructuras a nivel mundial. La CMR estimó que la cantidad de personas desplazadas en el planeta por las represas se situaba entre 40 y 80 millones de personas, y que los principales afectados eran los grupos más pobres y vulnerables. En septiembre de ese mismo año, St. Louis et al. publicaron un artículo en la Revista Bioscience donde observaban que las emisiones de los embalses constituían 7% del impacto total del calentamiento global debido a la emisión de metano y dióxido de carbono causado por la descomposición de plantas acuáticas, algas y materia orgánica, sobre todo en las zonas tropicales. Y en lo que refiere al rendimiento, la CMR afirmó que las represas frecuentemente no alcanzan los objetivos de rendimiento y que de las 63 grandes represas que había examinado, el 55% generaba menos energía de la que había sido proyectada.

En el caso del Río Madera, las investigaciones realizadas ponen de manifiesto numerosos factores que van a entorpecer sin duda la viabilidad socioambiental del proyecto Río Madeira. En marzo de 2007, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales denegó la licencia medioambiental al proyecto debido a la “ausencia de control medioambiental y a la existencia de información contradictoria” del estudio presentado por el consorcio Odebrecht-Furnas, ya que no contemplaba todo el territorio afectado por el proyecto ni los impactos en las comunidades indígenas. En la actualidad, hay organizaciones brasileñas que están utilizando la vía judicial para luchar contra estas irregularidades. Entre los graves impactos sociales y ambientales que implica la implementación de estas megainfraestructuras, podemos citar.

- El hecho de que ponen en peligro una de las zonas de más importante biodiversidad de América del Sur
- El hecho de que impliquen la inundación de territorios indígenas y campesinos, y por tanto el desplazamiento de 10.000 personas en el lado brasilero
- En el lado boliviano, se estima que 1.400 familias serán afectadas por la construcción de las represas. En su mayoría son comunidades indígenas Chácobo, Tacana, Esse Eja, Cavineñas, Machineri, Joaquinianas, Toromonas, Yaminahua e integrantes de un pueblo indígena no contactado, el pueblo Pacahuara.
- Los impactos sobre la pesca, que permite la supervivencia de 2.4000 pescadores en ambos lados de la frontera.
- La zona afectada potencialmente por las represas es una de las zonas con más enfermedades como la malaria y el dengue en la región amazónica. La inundación y el consecuente estancamiento de las aguas posibilitará el aumento considerable de estas enfermedades.

A nivel local, se hace cada vez más visible una oposición popular al Complejo Hidroeléctrico. En efecto, el conjunto de impactos sociales y ambientales del Complejo del Río Madera han llevado a la Federación Sindical única de Trabajadores Campesinos de Pando (Bolivia), a la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia y al Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo a presentar una demanda conjunta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contra el gobierno de Brasil el 5 de diciembre de 2007. Por otra parte, el 28 de junio de 2008, en una reunión binacional en la ciudad de Riberalta (Bolivia), la Federación de Trabajadores y Campesinos de la Provincia de Vaca Díez (Bolivia), la Central Indígena de Guajaramerín (Brasil), la Central Indígena de la Región amazónica de Bolivia (Bolivia), OITA, CIPOAP y el Movimiento de Afectados por Represas (Brasil), se declararon en estado de emergencia.

Nos estamos refiriendo también a una región que ya ha sufrido importantes inundaciones actualmente debido a los desajustes causados por el cambio climático y que han tomado la forma del “Fenómeno de La Niña”. Al respecto, cabe señalar que dichas inundaciones se sitúan principalmente en zonas del Departamento del Beni donde se han llevado a cabo actividades de deforestación para dar paso a actividades de ganadería intensiva, y a monocultivos de soja y de caña de azúcar. Las regiones donde no ha habido deforestación, y donde se ha mantenido los cauces de los ríos libres son aquellas donde menos inundación ha habido (Departamento de Pando). El Complejo Hidroeléctrico se sustenta, tal y como lo afirman sus principales defensores, en una perspectiva de desarrollo industrial de la región que incluye la extensión de los monocultivos y la consecuente eliminación de la cobertura forestal.

La importancia de los impactos negativos en términos sociales y ambientales llevó de hecho en un primer momento, al gobierno boliviano a emitir una serie de cuestionamientos y “dudas razonables” que no fueron respondidas de manera adecuada por el gobierno brasileño. No obstante, la actual postura del gobierno boliviano parece tender hacia la aceptación del Proyecto en su totalidad. En efecto, anunció el día 18 de julio que impulsará la construcción de la represa de Cachuela Esperanza.

En la zona potencialmente afectada en Bolivia por el Complejo Hidroeléctrico se sitúa el **Proyecto “Desarrollo económica y social de las y los campesino/as e indígenas del Norte Amazónico de Bolivia**, a cargo de Veterinaria Sense Fronteras y el Proyecto “Fortalecimiento de la planificación, gestión y prestación de servicios de la Red de Atención Primaria de Salud del Municipio de Riberalta (Bolivia)”, a cargo de Medicus Mundi Cataluña. Por otra parte, queremos recordarles que la Gobierno catalán apoya a Bolivia en el área de medio ambiente. En ese sentido, destacar que en este país también opera Ingeniería Sense Fronteras, colaborando con el Proyecto “Mejoramiento del acceso a la energía en las comunidades rurales de Bolivia”.

El Complejo Hidroeléctrico tendrá repercusiones que serán totalmente contrarias a los objetivos con los cuales las ONGs catalanas llevan trabajando desde hace varios años en la región, tales como: el mejoramiento de las condiciones de vida las poblaciones más empobrecidas y de la defensa de la Soberanía Alimentaria. Por otra parte, existen reales posibilidades de mejorar de manera sostenible y digna las condiciones de vida de la gente, mediante proyectos de micro-centrales y turbinas que respondan de manera adecuada a las necesidades locales sin destruir el medio ambiente. Se trata de un área de trabajo que podríamos potenciar aprovechando los conocimientos y la experiencia de ONGs como ESF, en estrecha coordinación con los pobladores locales.

Conociendo la sensibilidad social y ambiental del Gobierno catalán, llevamos este caso a su conocimiento. Consideramos posible el brindar un apoyo realizando esfuerzos que permitan desarrollar proyectos de carácter sostenible y duradero en la región, sin necesidad de construir las represas mencionadas.

Por ello, solicitamos una reunión con Ustedes con el objetivo de evaluar las posibles medidas que pueden ser tomadas en este caso desde el Gobierno catalán.

Atentamente,

Gustavo Duch - Veterinaris Sense Fronteres

Francesc Alvarez - Medicus Mundi Catalunya

Victor Maeso - Setem

Alex Guillamon - Entrepobles

Mónica Vargas Collazos - Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització,

Macarena Maffet - Enginyeria Sense Fronteres

Localización de las represas hidroeléctricas del Complejo Río Madera en Brasil y Bolivia



Fuente: BICECA (2008). "Megaproyecto: Conjunto de Sub-proyectos Complejo Río Madera" (<http://www.biceca.org/es/Project.Overview.138.aspx#Biblioteca>)

Edición:



Con la participación de:



Con el apoyo de:



El trabajo del ODG se ha realizado también gracias al apoyo de:



Un caso de anticooperación española

“EL COMPLEJO DEL RÍO MADERA”



Desde hace cerca de 10 años, el principal trabajo del Observatori del Deute en la Globalització, en el seno de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha consistido en la investigación activista sobre las relaciones de desigualdad Norte-Sur, así como sobre la generación de deudas contraídas durante el actual proceso de globalización. Hemos ampliado esta actividad hacia otras esferas, de lo que denominamos “la Anticooperación”, es decir, el conjunto de procesos y mecanismos transnacionales generados por los países económicamente más poderosos, que, en el marco de las relaciones internacionales, interfieren negativamente en los países más empobrecidos.

Este informe, fruto del trabajo realizado conjuntamente con Veterinaris Sense Fronteres y SETEM, apunta el caso del “Complejo del Río Madera”, uno de los mayores conflictos sociales, económicos y ambientales implicados por el pujante desarrollo de las megainfraestructuras en América del Sur, en el marco de la Iniciativa para la Integración de las Infraestructuras Regionales Sudamericanas (IIRSA). Nace de la preocupación generada por los impactos que puede tener la construcción de megarepresas en la Amazonía brasileña y boliviana, con la participación del principal banco español: el Banco Santander. Esperamos que sea una contribución a los esfuerzos desplegados por la sociedad civil movilizadora, en aras de que las autoridades y empresas españolas dejen de anticooperar y asuman por fin la responsabilidad exterior que tienen sus actividades, sobre todo cuando inciden negativamente en las poblaciones más empobrecidas y en los ecosistemas más vulnerables.